

2. Tensiones

- Durante 2017 se registraron 88 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (37) y Asia (18), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (13), Oriente Medio (12) y América (ocho).
- Se produjo una escalada de la situación en Camerún como consecuencia de la represión del movimiento secesionista que provocó el surgimiento de milicias que recurrían a la lucha armada para alcanzar la independencia de las provincias anglófonas
- Más de 120 personas murieron y varios miles resultaron heridas y detenidas durante las masivas movilizaciones antigubernamentales de la primera mitad del año en Venezuela.
- Dimitió el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif después de que la Corte Suprema le inhabilitara para ostentar cargos públicos a raíz de las informaciones reveladas por los Papeles de Panamá.
- Las relaciones entre India y Pakistán estuvieron marcadas por los enfrentamientos militares en la frontera, que dejaron decenas de muertes.
- Se incrementó la tensión en la península coreana a raíz de los ensayos nucleares y con misiles balísticos intercontinentales por parte de Corea del Norte.
- Defensores de derechos humanos denunciaron un grave incremento de los secuestros y desapariciones a manos de agentes de seguridad en la república de Chechenia.
- Las peores protestas en Irán desde 2009 derivaron en hechos de violencia que causaron la muerte de una veintena de personas al finalizar el año.
- Líbano se vio afectado por las repercusiones de la guerra de Siria y por el complejo escenario político interno, incluyendo la sorpresiva renuncia del primer ministro desde Arabia Saudita.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2017. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2017. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan Los países afectados por situaciones de tensión durante 2017.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2017

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
África⁵			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka	2
	Recursos		↓
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	3
	Autogobierno, Recursos		↑
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel	3
	Gobierno		↑
Camerún (Ambazonia/North West y South West)	Interna	Gobierno, oposición política y social de las provincias anglófonas de North West y South West, grupos armados ADF, SOCADEF y SCDF	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Chad	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=
Congo, Rep. del	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Côte d'Ivoire	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
Djibouti	Interna	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)	1
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	2
	Territorio		=
Etiopía	Interna	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		=
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad		=
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		↓
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	1
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		↑

- En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
- La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2017 con la del año 2016 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2017 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
- Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en el 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Lesotho	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, oposición política	2
	Gobierno		↑
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		=
Marruecos	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁶	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mozambique	Interna	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO, grupo armado islamista al-Shabaab	3
	Gobierno, sistema		↓
Níger	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)	3
	Gobierno, Sistema		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	2
	Identidad, Recursos		↑
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
RDC – Rwanda ⁷	Internacional	Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda ⁸	Internacional	Gobiernos de RDC y Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones	1
	Autogobierno		↑
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	1
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		=

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

7. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, desde el informe *Alerta 2016* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

8. Ibid.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Togo	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↓
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)	1
	Gobierno, Autogobierno, Recursos		=
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, Fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, 18 Revolucionarios, 18 Sureños)	2
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares	1
	Gobierno		↓
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	2
	Gobierno		↑
México	Interna	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.	2
	Sistema, Gobierno		↑
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Gobierno, Recursos		=
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islami, JMB)	2
	Gobierno		↓
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		↓
Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁹	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	3
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	2
	Sistema		↓
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	2
	Autogobierno, Identidad		↓

9. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Nepal	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	3
	Gobierno, Sistema		↓
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles	1
	Autogobierno, Identidad		=
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		↓
Europa			
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna	Gobierno, oposición social y política	1
	Gobierno		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Chipre	Interna internacionalizada	Gobierno de Chipre, Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
España (Cataluña)	Interna	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil, poder judicial	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Macedonia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados, incluyendo ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↑
Rusia (Chechenia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados yihadistas (ISIS, Emirato Caucásico)	2
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Serbia – Kosovo	Internacional ¹⁰	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		↓
Oriente Medio			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	2
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Identidad		↑
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel ¹¹	Internacional	Irán, EEUU, Israel	2
	Sistema, Gobierno		↑
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)	2
	Sistema, Recursos, Territorio		=
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham	3
	Gobierno, Sistema		↑
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

10. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

11. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Oriente Medio			
Yemen (sur)	Interna	Gobierno, grupos de oposición secesionistas y autonomistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur /Al-Hiraak al-Janoubi)	2
	Autogobierno, Recursos, Territorio		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2017

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2017, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2017 se identificaron 88 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 37 casos, seguida de Asia (18), Europa (13), Oriente Medio (12) y América Latina (8). A pesar de que el número total de crisis socio-políticas es muy parecido al del año anterior (87), hubo variaciones significativas respecto de los casos que se incluyen en tal cifra, con casos que dejaron de ser considerados crisis-socio-políticas en 2017 por una reducción clara y sostenida de los niveles de tensión, como Indonesia (Aceh), Kazajstán, Tailandia-Camboya, Rusia (Ingushetia), Rusia (Kabardino-Balkaria). Por otro lado, hubo siete casos que se incorporaron al listado de crisis socio-políticas por el incremento de los niveles de violencia o movilización social –Camerún (Ambazonia/North West y South West), Marruecos, Togo, Belarús, España (Cataluña) e Irán – y otro caso más, el de China (Xinjiang), que hasta el año 2016 había sido considerado conflicto armado, pero que dejó de ser considerado como tal por la reducción de violencia que se experimentó durante los años 2016 y 2017.

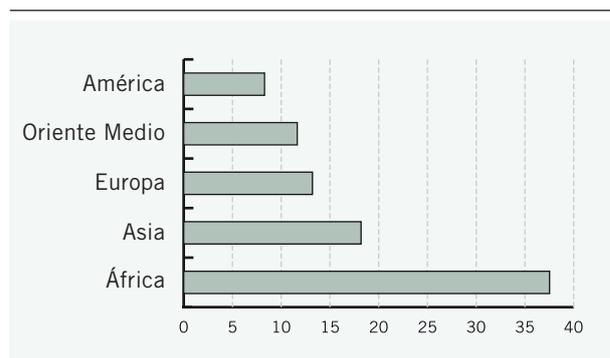
Si bien las situaciones de tensión pueden atribuirse a múltiples factores, el análisis del panorama de crisis en 2017 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con los datos observados en años precedentes, **a nivel global un 68% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados. En América Latina, por ejemplo, todas las tensiones identificadas estuvieron vinculadas a alguna de estas dos variables. A su vez, **cerca de**

la mitad de las tensiones (45%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (casi el 70%) o Asia (más del 55%). Cabe destacar que en alrededor de una tercera parte de las tensiones (34%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

En línea con años anteriores, **algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (48 casos o un 54%)**, siendo especialmente paradigmático el caso de América Latina, en el que la práctica totalidad de los casos (excepto Haití) fueron de este tipo. Por otra parte, **casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (26 casos o un 30%)**, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (54% de los casos) u Oriente Medio (42%) y significativamente inferior en casos como África (19%) y América Latina (13%). Finalmente, **una sexta parte de las tensiones fueron internacionales (14 casos o un 16%)**, aunque en regiones como América Latina no se identificó ningún contexto de este tipo. En cuanto a la evolución de las tensiones, un 40% de los casos no experimentó cambios significativos, en un 18% de los casos se produjo una cierta mejoría y en el 42% restante de las crisis se registró un deterioro con respecto a 2016. Excepto en el caso de Asia, en todas las regiones del mundo hubo bastantes más casos en los que se registró un deterioro de la tensión que

Durante 2017 se identificaron 88 escenarios de tensión, 37 en África, 18 en Asia, 13 en Europa, 12 en Oriente Medio y ocho en América Latina

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2017



no una mejoría, siendo esta proporción especialmente significativa en África (16 casos que empeoraron por solamente cuatro que mejoraron), Europa (nueve y cinco respectivamente) y Oriente Medio (cinco y cero respectivamente). En términos agregados, el número de tensiones cuya situación empeoró dobló ampliamente a aquellas en las se registró una mejora de la situación.

Respecto de la intensidad de las crisis socio-políticas, durante 2017 casi la mitad de las mismas presentaron una intensidad baja (47%, un porcentaje claramente inferior al 54% que se registró en 2016), un tercio registró una intensidad media (el año pasado el porcentaje fue del 22%) y una quinta parte (18 casos) tuvo altos niveles de tensión, más de la mitad de las cuales en África. En términos comparativos con el año anterior, la cifra de tensiones graves se redujo ligeramente (un 20% en 2017 frente a un 24% en 2016) por la existencia de varios casos que en 2016 habían experimentado altos niveles de tensión, pero cuya situación desescaló durante el año 2017. Fue el caso de Túnez, El Salvador, Corea del Norte-Corea del Sur, India (Assam), Bangladesh, Turquía o Israel-Siria-Líbano. Sin embargo, también hubo tres escenarios que habían registrado niveles medios de tensión en 2016 cuyos niveles de conflictividad se incrementaron sustancialmente y fueron considerados de alta intensidad en 2017: Burkina Faso, Níger y Venezuela.

Las tensiones de mayor gravedad en 2017 en África fueron **Angola (Cabinda)** –donde se mantuvieron los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y el FLEC-FAC en el enclave de Cabinda y, además, se incrementó la tensión en el conjunto del país a raíz de las elecciones legislativas y presidenciales y de las movilizaciones y protestas vinculadas a demandas económicas y sociales–; **Burkina Faso** –donde se incrementaron notablemente los ataques por parte de grupos armados de corte yihadista, especialmente en el norte del país–; **Camerún (Ambazonia/North West y South West)** –donde la proclamación en octubre de la República Federal de Ambazonia, que agrupa a dos regiones anglófonas, provocó un incremento sin precedentes de la violencia en las provincias de North West y South West y dejó al país al borde del conflicto armado–; **Etiopía** –donde prosiguió la que ha sido calificada como la mayor movilización antigubernamental de la última década como consecuencia de la represión de las protestas por parte del Gobierno, que comportó la muerte de cientos de personas y la detención otras 23.000 personas hasta finales de 2017–; **Etiopía (Oromiya)** –donde varios cientos de personas murieron como consecuencia del incremento de las operaciones por parte de la denominada Policía Liyu en la región de Oromiya, epicentro de las protestas contra el régimen

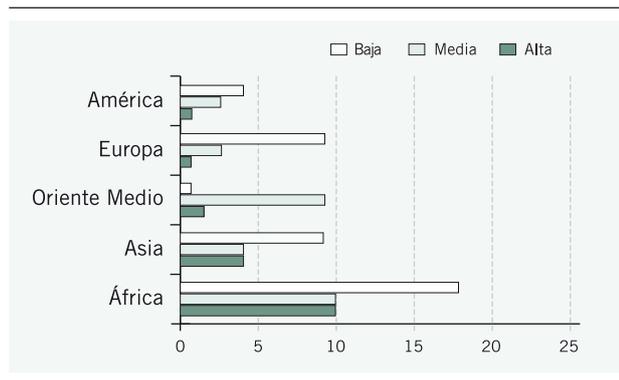
Un 68% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos

Una quinta parte de las tensiones en todo el mundo fueron de alta intensidad, más de la mitad de las cuales en África

etíope iniciadas a finales de 2015 y que provocaron la muerte de cientos de personas–; **Kenya** –donde se vivió una grave y compleja situación de tensión y violencia en la que destacaban las movilizaciones políticas vinculadas a la celebración de las elecciones en 2017, las acciones del grupo armado islamista al-Shabaab, las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, la creciente presencia de ISIS desde 2016 o los persistentes enfrentamientos de carácter intercomunitario–; **Mozambique** –donde, a pesar del avance en las negociaciones entre el Gobierno y el grupo opositor RENAMO, se incrementó notablemente la tensión a finales de año por el surgimiento en el norte del país de un grupo armado de inspiración islamista autodenominado al-Shabaab–; **Níger** –donde se incrementó la inseguridad en varias zonas fronterizas por los ataques de Boko Haram y otros grupos armados de inspiración yihadista–; **Nigeria** –donde persistió la campaña militar contra Boko Haram en el noreste, se incrementó la tensión entre el Estado y movimientos secesionistas en la región sureña de Biafra o se registraron numerosas acciones de violencia entre las comunidades ganaderas fulani y comunidades agrícolas en el cinturón central del país–; y **RDC** –donde confluyeron una notable escalada de la violencia en la región de Kasai y la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila.

Las tensiones de máxima intensidad en el resto de regiones fueron **Venezuela** –donde más de 120 personas murieron en el marco de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años–; **Corea, RPD–EEUU, Japón, Rep. de Corea** –donde se incrementó la tensión entre Corea del Norte y buena parte de la comunidad internacional a raíz de los avances en las capacidades nucleares y balísticas de Corea del Norte–; **India (Manipur)** –donde decenas de personas murieron en el marco del conflicto que enfrenta al Estado con varios grupos insurgentes manipuris–; **India-Pakistán** –donde se produjeron numerosos enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad de los dos países en la denominada Línea de Control que separa a los dos países–; **Pakistán** –donde se registraron episodios de violencia vinculados a varios ejes de tensión, incluyendo la crisis política que afecta al país y que provocó la renuncia del primer ministro, Nawaz Sharif–; **Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)** –donde decenas de personas murieron en 2017 a raíz de las violaciones del alto fuego e incidentes con armamento pesado en torno a la línea de contacto–; **Egipto** –donde persistió la represión a la oposición y a los medios de comunicación críticos– y **Líbano** –donde se vivió una compleja situación política derivada de las

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



consecuencias del conflicto armado en Siria y de la violencia en el seno de la comunidad palestina del país.

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, en 2017 **África** se mantuvo como principal escenario de las crisis socio-políticas a nivel global, albergando un 42%, una cifra relativamente parecida a la de años anteriores. Sin embargo, respecto del año anterior cabe destacar la inclusión de tres nuevos casos –Camerún (Ambazonia/North West y South West), Marruecos y Togo– en los que los niveles de conflictividad se incrementaron respecto del año 2016. Como se mencionó, **más de la mitad de las crisis de alta intensidad en todo el mundo –10 sobre un total de 18– se concentraron en el continente africano en 2017: Angola (Cabinda), Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenya, Mozambique, Níger, Nigeria y RDC.** Respecto de las situaciones de máxima tensión del año anterior, la conflictividad política y social se redujo en Túnez, pero se incrementó en los casos de Burkina Faso –donde se observó escalada de los ataques por parte de grupos armados de corte yihadista que operan en la región del Sahel– y Níger –donde los ataques por parte de Boko Haram y otros grupos armados de corte yihadista motivó la creación de la fuerza contrainsurgente multinacional Sahel G5, conformada por Níger, Malí, Chad, Mauritania y Burkina Faso. En este sentido, cabe señalar que cerca de la mitad de las crisis sociopolíticas en África (16 casos) experimentaron un deterioro, mientras que solamente se observó una cierta mejora en la situación de tensión en tres: Gambia, África Central (LRA) –donde se observó una significativa reducción de la actividad armada por parte del LRA, a pesar de la continuación de las operaciones militares para desarticular al grupo en el triángulo formado entre la RCA, RDC y Sudán del Sur–, Mozambique –donde la tensión se redujo notablemente por la buena evolución de las negociaciones de paz entre RENAMO y FRELIMO y la primera reunión directa en los últimos años entre el presidente del país y el líder del antiguo grupo armado RENAMO¹² y Túnez, país en el que persistieron tanto la actividad de varios grupos armados como el clima de tensión política vinculado a los problemas económicos y sociales que ha tenido el

país en los últimos años, pero en el que se redujeron la intensidad y letalidad de los episodios de violencia respecto del año 2016.

Por otra parte, la gran mayoría de las tensiones en África fueron de carácter interno (65%), en líneas similares a años anteriores. Algo menos de una quinta parte de las crisis presentó elementos de internacionalización (19%), entre ellos la presencia y acción de actores foráneos, ya fueran actores armados no estatales de diverso tipo –como la organización armada al-Shabaab (procedente de Somalia) en Kenya–, las acciones de grupos yihadistas regionales o globales en Níger o Burkina Faso, la creciente consolidación de ISIS en países como Kenya, la presencia de tropas internacionales –como la ONUCI en Côte d’Ivoire– o la influencia de sectores de la diáspora –como por ejemplo en Eritrea o Rwanda. Solo seis de las 37 tensiones en África tuvieron un carácter internacional, la mayor parte de ellas en la región de Grandes Lagos, África Central y Cuerno de África: África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. Sin embargo, en ninguna de ellas se observó un incremento de la tensión durante el año 2017.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, las crisis fueron de dimensión multicausal, en consonancia con la tendencia a nivel global. **Casi tres cuartas partes de las crisis sociopolíticas acontecidas en África (27 de los 37 casos, un 73%) estuvieron vinculadas a la oposición al gobierno** y en cuatro casos –Kenya, Mozambique, Níger y Túnez– también se observó una oposición al sistema. Tres de estos cuatro casos mencionados –Kenya, Mozambique y Níger– se cuentan entre las tensiones de mayor intensidad del continente, mientras que la restante, Túnez, también fue considerada una tensión de máxima intensidad del año anterior. Por otra parte, el 38% de las tensiones en África tuvo como una de sus causas principales las demandas identitarias y/o de autogobierno, siendo que en cuatro contextos –Camerún (Ambazonia/North West y South West), Eritrea, Etiopía (Oromiya) y Marruecos-Sáhara Occidental– confluyeron ambas variables. De entre éstas, cabe destacar especialmente la situación en Camerún, donde se produjo una movilización sin precedentes en las regiones de mayoría anglófona del país que desembocó incluso en la proclamación de la denominada República de Ambazonia –que incluye las regiones de North West y South West– y en los mayores niveles de confrontación política de los últimos años. Adicionalmente, cabe destacar que la lucha por el control de los recursos también fue un elemento relevante en África en más de una tercera parte (concretamente un 35%) de las tensiones en el continente.

En **Asia** se registraron 18 tensiones, dos menos que el año pasado. Por un lado, el conflicto en la región china de Xinjiang pasó a ser considerado como crisis sociopolítica (y no como conflicto armado) por la reducción clara y

12. Véase “Mozambique: segunda oportunidad para la paz” en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2018).

sostenida de la violencia en los dos últimos años, a pesar de que numerosas voces sostienen que el Gobierno y determinada prensa afín a Beijing invisibilizan buena parte de los episodios de violencia que ocurren en la región también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán. Sin embargo, hubo otros tres casos que dejaron de ser considerados crisis socio-políticas por la disminución de los niveles de tensión en los últimos años: Indonesia (Aceh), Kazajstán y Tailandia-Camboya. **Los contextos de mayor intensidad en el continente fueron India (Manipur), Pakistán, India-Pakistán y la tensión entre varios países y Corea del Norte a raíz de su programa nuclear.** Además, en todos estos casos excepto en Pakistán, la situación se deterioró respecto del año anterior. Sin embargo, también cabe señalar que hubo varios contextos que en 2016 fueron considerados de alta intensidad –Bangladesh, India (Assam) y la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur– y en los que en 2017 se observaron niveles intermedios de tensión. Al contrario que en buena parte de las otras regiones del mundo, en las que hubo un porcentaje significativo de las tensiones en las que la situación se deterioró a lo largo de 2017, en el caso de Asia en casi la mitad de los casos (ocho) no se registraron cambios significativos, en una tercera parte (seis) se observó una mejora de la situación y solamente en cuatro casos se incrementaron los niveles de conflictividad: la disputa entre Corea del Norte y países como EEUU, Japón o Corea del Sur; India (Manipur), India-Pakistán y Kirguistán. Cabe señalar que, excepto en este último caso, el resto de contextos en los que la situación se deterioró en 2017 eran ya tensiones de alta intensidad.

Asia fue el continente con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, tres de las cuales se situaban en Asia Nororiental, concretamente en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu) y la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico. La otra tensión internacional fue la disputa histórica entre India y Pakistán. Además, hubo un tercio de las tensiones en Asia que fueron internas pero con una clara dimensión internacional. En la mayor parte de estos casos, el principal factor de internacionalización de la disputa fue la presencia de grupos armados regionales, como en tres de los países de Asia Central –Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán– o bien los vínculos transnacionales de organizaciones armadas locales – como en la provincia china de Xinjiang o el estado indio de Assam. En el caso de la provincia china del Tíbet, la disputa tiene una dimensión internacional por la presencia del Gobierno tibetano en el exilio en el norte de India y por las movilizaciones de la diáspora tibetana, especialmente en varios países colindantes con China.

Asia fue el continente con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, tres de las cuales se situaban en Asia Nororiental

En América Latina, Venezuela fue escenario de las protestas antigubernamentales más intensas de los últimos años

En cuanto a las causas de fondo, 10 de las 18 tensiones de la región estuvieron vinculadas a la oposición al sistema o al gobierno. En cuatro de ellas –Pakistán y las tres ex repúblicas soviéticas de Asia Central: Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán– coincidieron ambas variables, mientras que en otras tres –las provincias chinas de Tíbet y Xinjiang y la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur– solamente se identificó la oposición al sistema como una de los ejes fundamentales de la tensión. Por otra parte, otros 10 contextos (55%) estuvieron relacionados con las aspiraciones identitarias y/o demandas de autogobierno. Finalmente, el control de los recursos y el territorio también fue un factor presente en una tercera parte de las tensiones en Asia.

América, en línea con años anteriores, concentró el menor número de tensiones a nivel mundial, con un total de ocho casos en 2018 (9%). La mitad de las mismas fueron de baja intensidad, mientras solamente una de ellas – Venezuela, que en 2017 sufrió las mayores protestas y episodios de violencia de los últimos años– fue de alta intensidad. Sin embargo, **el hecho de que América Latina sea la región del mundo con un menor número de tensiones (y también de conflictos armados), así como el hecho de que las mismas suelen ser de intensidad baja o media, contrasta con la constatación de que varios de los países la región albergan algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo.** De hecho, buena parte de las tensiones en América Latina sufren altos índices de homicidios, ya sea en términos relativos (como Honduras, El Salvador, Guatemala o Venezuela) o bien en términos absolutos (como México). Por otra parte, todas las tensiones en América Latina fueron de carácter interno, con la excepción de Haití, país en el que la MINUSTAH durante muchos años ha sido uno de los actores protagonistas de la situación de tensión política y social. Por otra parte, también cabe destacar los vínculos transnacionales de algunos actores (como las denominadas maras) en los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). De hecho, en algunos casos incluso podría considerarse que una única estructura (como la Mara Salvatrucha o la M18) tienen presencia estable en varios países de la región.

En cuanto a la evolución de las tensiones en América, en tres casos se observó un deterioro de la situación: Honduras, México y Venezuela. Honduras vivió la crisis sociopolítica más importante de los últimos años después de que la disputa sobre los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre provocara movilizaciones masivas en las que como mínimo una treintena de personas murieron. En México la tasa de homicidios se incrementó un 27% respecto del año anterior y alcanzó la cifra más alta en los últimos 20 años, según datos públicos, mientras que en Venezuela más de 120

personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas en las protestas antigubernamentales que se registraron en la primera mitad del año. Por el contrario, en otros dos casos –El Salvador y Haití– se observó una reducción de la tensión. Cabe destacar especialmente el caso de El Salvador, que a pesar de ser el país centroamericano con mayores índices de violencia, redujo notablemente –un 25% aproximadamente– la tasa de homicidios respecto del año anterior, consolidando así la tendencia a la reducción en el número de homicidios de los dos últimos años. **Las ocho tensiones identificadas en América Latina tuvieron entre sus causas principales la oposición a políticas gubernamentales,** que se materializó en protestas de diversa intensidad y carácter, como las mencionadas en Venezuela o bien en Honduras. En algunos casos, ese factor se dio en combinación con otras causas, como las demandas de autogobierno (Bolivia) o las disputas en torno al acceso o uso de recursos (Bolivia, Perú).

En **Europa**, en línea con la tendencia de años anteriores, la inmensa mayoría de los casos de tensión (casi el 70%) fueron de baja intensidad, pero también fue el continente en el que se deterioró la situación en un mayor porcentaje de contextos de crisis. Concretamente, en nueve de las 13 tensiones se registró un agravamiento de la situación política y social. Cabe destacar especialmente la situación en Rusia, donde se registró un incremento de la actividad armada de organizaciones como ISIS o al-Qaeda y donde se agudizó notablemente la tensión política a raíz de las elecciones presidenciales de marzo de 2018, que motivaron las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años. También en Rusia, en el marco del conflicto que enfrenta al Estado con varias organizaciones yihadistas en la república de Chechenia, se incrementaron la frecuencia y letalidad de los episodios de violencia –provocando la muerte de unas sesenta personas– y se produjo el mayor aumento en el número de secuestros desde la segunda guerra chechena de los años noventa. Además, en otros casos como España (Cataluña), que en 2016 no fue considerada como de tensión, la conflictividad política y social se agudizó notablemente. Por el contrario, hubo casos como las repúblicas caucásicas de Ingushetia o Kabardino-Balkaria, que dejaron de ser considerados tensión por la clara disminución de los niveles de conflictividad en comparación con los años anteriores. Cabe destacar también la disminución de las hostilidades armadas en el conflicto que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán por el estatus del enclave de Nagorno-Karabaj, el de mayor intensidad en toda la región. A pesar de que más de 50 personas fallecieron como consecuencia de las violaciones del alto fuego e incidentes armados (algunos de ellos con armamento de gran calibre) en torno a la línea de contacto, la situación mejoró respecto del año anterior, en el que más de

En nueve de las 13 tensiones en Europa se registró un agravamiento de la situación política y social

De las 12 tensiones que se registraron en Oriente Medio, no hubo ni un solo caso en el que se observara una mejora de la situación respecto del año anterior

200 personas fallecieron a causa del conflicto, si bien continuaron los llamamientos de alerta por los riesgos de nuevas escaladas. Finalmente, respecto de las tensiones en Europa cuya intensidad disminuyó en 2017 cabe mencionar el caso de Turquía. A pesar de que se mantuvo el estado de emergencia y siguieron produciéndose episodios de violencia y graves y masivas violaciones de derechos humanos, la crisis disminuyó respecto del año 2016, en el que hubo un intento de golpe de Estado que provocó la muerte de más de 260 personas y en el que decenas de personas murieron por varios atentados reivindicados por el grupo armado ISIS.

En relación a las causas de fondo, cabe destacar que Europa fue la región en la que tuvieron una mayor incidencia las disputas vinculadas con las demandas identitarias y/o de autogobierno. Concretamente, casi el 70% de las mismas estuvieron vinculadas a estos factores, en sintonía con los años precedentes. Por otra parte, más del 60% de las crisis sociopolíticas en Europa tuvieron como una de sus causas principales la oposición de determinados colectivos a las políticas del Gobierno o bien al sistema en su conjunto. En los tres casos en los que registraron ambas variables (oposición al gobierno y oposición al sistema) –Rusia, Rusia (Chechenia) y Turquía–, se observó la presencia de grupos yihadistas que pretendían la instauración de sistemas políticos de corte confesional, como ISIS o Emirato Caucásico. Finalmente, cabe señalar que en el control del territorio fue un factor presente en dos de las tensiones más prolongadas de la región: la disputa entre el Gobierno de Chipre y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre o el contencioso por la región de Nagorno-Karabakh entre Armenia y Azerbaiyán. **Más de la mitad de las tensiones en Europa fueron internas internacionalizadas, destacando el rol que gobiernos foráneos juegan en determinados contextos.** Algunos de los ejemplos más relevantes de la región serían el papel de Grecia y Turquía en el caso de Chipre o el de Rusia en algunas regiones autoproclamadas independientes en el marco de países que habían formado parte de la URSS: Abjasia y Osetia del Sur en Georgia o bien Transdniestria en la República de Moldova. Al menos de un tercio de los casos fueron tensiones internas, mientras que dos casos fueron considerados tensiones internacionales: Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabakh) y Serbia-Kosovo.

Por último, en **Oriente Medio** se registraron 12 tensiones, una cifra parecida a la del año anterior pero que incorporó el caso de Irán por el incremento de la tensión que se vivió a finales de 2017. En tales fechas, se registraron importantes movilizaciones por cuestiones económicas –como los precios, el desempleo o la corrupción– que adquirieron un carácter más político y que se convirtieron en una

de las mayores crisis sociales de la década, pues numerosas personas murieron y más de un millar fueron arrestadas. Cabe destacar que Oriente Medio fue la región del mundo con menor número y porcentaje de tensiones de baja intensidad (solamente un caso, que significa el 8%). La mayor parte de los casos fueron de intensidad media, mientras que hubo dos casos con altos niveles de tensión: Egipto y Líbano. A pesar de que hubo solamente estos dos casos de alta intensidad, es importante reseñar que no hubo ni un solo caso en el que se observara una mejora de la situación respecto del año anterior. En siete casos la situación permaneció en niveles parecidos a los del año anterior, mientras que en otros cinco casos la tensión aumentó: Bahrein –donde se incrementaron las manifestaciones y los episodios de violencia, que provocaron la muerte de varias personas, y se agudizó la persecución a sectores opositores–; el mencionado caso de Irán; Irán-EEUU, Israel –donde se volvió a incrementar sustancialmente la tensión tras la posibilidad expresada por el Gobierno de EEUU de revisar el acuerdo nuclear del año 2015–; Iraq (Kurdistán) –donde se intensificó la tensión entre el Gobierno central y el Gobierno Regional del Kurdistán a raíz de la celebración de un referéndum de independencia en la región kurda, y que provocó la reacción de países como Irán o Turquía–; o Líbano, país en el que aumentó la letalidad de los numerosos episodios de violencia ocurridos en el país, principalmente vinculados a la acción de las fuerzas de seguridad libanesas contra varios grupos armados que operan en la frontera con Siria, así como a las operaciones de Hezbollah contra estos mismos grupos a ambos lados de la frontera y en estrecha cooperación con el Gobierno sirio.

La situación en la zona se caracterizó por su complejidad en cuanto a las causas de las disputas. **Un 58% de las tensiones (siete casos) tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema.** En la mitad de las crisis (seis casos) el factor de demandas identitarias y/o de autogobierno fue también una de las motivaciones destacadas. Asimismo, como en otras regiones, también la dimensión de disputa por los recursos y/o territorio fue una de las causas principales en una cuarta parte de los casos, si bien este elemento alimentó en diverso grado muchas situaciones. Por otra parte, cinco de las tensiones en la región fueron de carácter interno y dos de carácter internacional: la disputa entre Irán y EEUU e Israel en torno al programa nuclear iraní, a pesar de la firma del acuerdo nuclear en 2015, y el caso de Israel-Siria-Líbano, vinculado a las dinámicas y consecuencias regionales de los conflictos en Siria y en Israel-Palestina, así como al rol desempeñado tanto por Israel como por Siria en Líbano. Entre los elementos de internacionalización de las cinco tensiones internas internacionalizadas en Oriente Medio se cuentan la presencia de grupos de adscripción regional o internacional (como ISIS en Líbano; AQPA en Arabia Saudita) o grupos locales con bases en el exterior o que lanzan ataques desde el exterior (PJAK y PDKI en Irán, entre otros) o la implicación de gobiernos externos,

como el rol que juegan países como Irán o Turquía en la tensión que afecta a la región kurda en Iraq.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Austral

Mozambique	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO, grupo armado islamista al-Shabaab

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (antigua Zimbabue) y la Sudáfrica del *apartheid*, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país se vio afectado por una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra, un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. El líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, ha sido incapaz de convertir su partido en una plataforma organizada y estructurada con aspiraciones de alcanzar el poder y desde las primeras elecciones en 1994 hasta la actualidad, ha ido perdiendo cuota de poder político en detrimento de FRELIMO y otros partidos, como el MDM (escisión de RENAMO). En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992.

Las tensiones entre el Gobierno mozambiqueño y el principal grupo opositor RENAMO se redujeron ostensiblemente durante el año, debido a la evolución positiva de las negociaciones de paz. No obstante, en octubre se produjo una escalada de la violencia política por el surgimiento de un grupo armado de carácter islamista en Cabo Delgado. El origen de la tensión entre RENAMO y FRELIMO deriva de la crisis surgida tras las elecciones presidenciales y legislativas

de 2014 y la demanda del grupo opositor de gobernar en las seis provincias del centro y norte del país donde obtuvieron la mayoría de votos en los comicios. A finales de 2016 el presidente Felipe Nyusi, presidente del país, y Afonso Dhlakama, líder del antiguo grupo armado y actual partido político opositor RENAMO, mantuvieron una conversación telefónica que sirvió para acercar posturas, lo que llevó a que la oposición declarase una tregua unilateral hasta principios de año para que la población mozambiqueña pudiera recibir el año nuevo en un clima de paz. Dhlakama prorrogó durante el año esta tregua, lo que permitió el avance de las negociaciones de paz durante el año. En julio el Gobierno retiró las tropas de ocho posiciones cercanas a las montañas Gorongosa, el feudo de RENAMO, tal y como RENAMO había exigido en junio para proseguir con las negociaciones. En agosto Nyusi y Dhlakama celebraron su primera reunión directa desde 2015. La reunión tuvo lugar en el feudo de RENAMO situado en el distrito montañoso de Gorongosa. La reunión pretende impulsar el proceso de paz. RENAMO señaló que el proceso de descentralización debía presentarse en el Parlamento en diciembre, antes de que se celebren las elecciones locales de 2018. Además, Dhlakama en una entrevista publicada el 31 de agosto destacó que firmaría un acuerdo de paz con el Gobierno a finales de noviembre para poner fin a la disputa que tuvo lugar en las elecciones de 2014.

Sin embargo, **el país sufrió una escalada de la tensión en octubre, cuando un grupo supuestamente islamista llevó a cabo un ataque en la región de Cabo Delgado, en el extremo norte del país.** El grupo, que se autodenominaba al-Shabaab, como su homónimo de Somalia, atacó tres comisarías en la localidad costera de Mocimboa da Praia causando la muerte de dos policías, y la respuesta gubernamental causó 14 víctimas mortales, miembros del grupo, incluyendo la muerte de un líder comunitario. Aunque el gobernador de la provincia afirmó que la situación había retornado a la calma, durante el mes de octubre se produjeron nuevas acciones en otras localidades de la zona. Los atacantes supuestamente no tienen conexión con el grupo somalí, y promovían un discurso similar al de otros grupos islamistas del continente, exigiendo la imposición de la Sharia en la región, la no escolarización secular de los menores y el rechazo al pago de impuestos estatales. El grupo está formado por jóvenes mozambiqueños que han estudiado en escuelas coránicas de Sudán y Arabia Saudita y profesan el wahabismo, según medios locales. Según el centro de estudios ACLED existen similitudes entre este ataque y otros conflictos abiertos en el país, ya que Cabo Delgado es una región rica en recursos naturales y el Gobierno ha hecho importantes inversiones para desarrollar la capital, Pemba, para ampliar la explotación de gas offshore, pero el resto de la región se mantiene en un elevado nivel de pobreza y no se ha beneficiado del boom económico que vive en país desde los años 2000.

Los niveles de violencia en Mozambique aumentaron a partir de octubre de 2017 por el surgimiento de un grupo armado de carácter islamista en Cabo Delgado

A medida que ha aumentado la violencia en Cabo Delgado, las conversaciones de paz entre RENAMO y FRELIMO han conducido a una reducción significativa de las acciones bélicas entre los grupos. Cabo Delgado es un feudo de apoyo gubernamental, ya que ha entablado fuertes relaciones con las organizaciones islámicas del país. Según análisis de ACLED, aunque este brote de violencia puede que no tenga recorrido a largo plazo, es indicativo del fracaso de FRELIMO en corregir los agravios de las periferias del país.

África Occidental

Burkina Faso	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel, G5 Sahel, Francia

Síntesis:

Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas. A finales de 2015, y tras la celebración de elecciones, el país cerró el periodo transicional y devolvió las instituciones a la ciudadanía. No obstante, en los últimos años se ha producido una escalada de las acciones de la militancia islamista armada en el norte del país.

La llegada a la presidencia en noviembre de 2015 de Roch Marc Christian Kaboré **dio comienzo a una nueva etapa en el país, cerrando el período de transición iniciado con la caída de Blaise Compaoré a finales de 2014. No obstante, 2017 se caracterizó por la continuación de la escalada de los ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista que operan en la región del Sahel que ya se había experimentado en 2016.** Así, durante el año se registraron diferentes incidentes que agravaron la situación de seguridad

nacional. El grave atentado de enero de 2016 (ataque a hotel en la capital, Ougadougou, que causó la muerte de 3 islamistas y 30 civiles) contribuyó a dinamizar los esfuerzos regionales y el despliegue del grupo regional de lucha contra terrorismo denominado G-5 Sahel group, conformado por Burkina Faso, Mauritania, Malí, Níger y Chad, países que crearon la fuerza de acción rápida regional en mayo de 2017. Durante el año las tropas francesas, malienses y burkinabesas llevaron a cabo acciones conjuntas. Francia a finales de abril ejecutó o capturó a una veintena de combatientes cerca de la frontera entre Burkina y Malí. El 2016 acabó con una escalada de las acciones con un ataque en la frontera entre Burkina Faso y Níger, donde un grupo armado atacó a las fuerzas de seguridad burkinesas en la gendarmería de Nassoumbou, matando a 12 soldados. Este ataque fue reivindicado por un nuevo grupo asociado a al-Qaeda y a Ansar Dine, Ansarul Islam.

Así, durante el año persistieron las acciones por parte de la insurgencia contra las Fuerzas Armadas y la población civil generando un clima de inseguridad en el norte, principalmente en la provincia de Soum, fronteriza con Malí, y en menor medida en la norteña Oudalan y otras provincias fronterizas occidentales como Kossi o Sourou, donde también se constataron acciones insurgentes. Cabe destacar el atentado que tuvo lugar en agosto en Ouagadougou, el primero desde enero de 2016, en el que dos supuestos militantes islamistas irrumpieron en un café en el que ejecutaron a 19 personas antes de ser tiroteados por las fuerzas de seguridad. Ningún grupo reivindicó el atentado. En diciembre, tras la Cumbre del Clima celebrada en París, se reunieron los presidentes del G5 Sahel y de Francia junto a la canciller alemana, el primer ministro italiano, el ministro saudí de Exteriores y el presidente de la Comisión de la UA con el objetivo de discutir la financiación de la fuerza conjunta antiterrorista, que se eleva a 450 millones de euros, de los que se estima que a finales de 2017 se habían recabado dos tercios del total, destacando las contribuciones de Arabia Saudita (100 millones de dólares), EAU (30 millones de dólares) y una ayuda bilateral de 60 millones de dólares de EEUU a los países miembros del G5 Sahel. En octubre la misión llevó a cabo el lanzamiento de su primera operación en las fronteras de Malí, Burkina Faso y Níger, y se estima que la fuerza conjunta G5 Sahel estará plenamente operativa durante el primer semestre de 2018 y contará con 5.000 soldados pertenecientes a los cinco países miembros.

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, oposición política y social de las provincias anglófonas de North West y South West, grupos armados ADF, SOCADEF y SCDF

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios del Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una reunificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. La confianza entre los activistas anglófonos y el Gobierno se ha visto socavada por el arresto de las principales figuras del movimiento federalista en enero de 2017, que ha dado alas a sectores favorables a la lucha armada como única vía para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se ha producido una escalada de las actividades insurgentes.

Camerún sufrió durante el año una escalada de la tensión que dejó al país al borde del conflicto abierto.

La crisis afloró en la segunda parte de 2016, con protestas sectoriales de abogados (por el despliegue de jueces francófonos, decisión percibida como un intento de eliminar la identidad anglófona), docentes y estudiantes. Estas protestas derivaron en la demanda de transformaciones políticas de fondo tendentes a dar un mayor grado de autonomía a las regiones de mayoría anglófona del país, las provincias de North West y South West, ante el subdesarrollo de la región, su falta de representación política y la erosión percibida de una herencia cultural anglófona. Las protestas de octubre de 2016, ignoradas en un primer momento y posteriormente reprimidas por la fuerza y tachadas de extremistas, fueron acompañadas de la detención de centenares de opositores, entre ellos diversos líderes de los movimientos independentistas. Los meses de noviembre de 2016, enero y febrero de 2017 fueron meses intensos en protestas, que vinieron seguidos de la escalada de la respuesta gubernamental. A principios de año el Gobierno cortó el acceso a internet en la región de mayoría anglófona durante tres meses, argumentando que las redes sociales se estaban utilizando para instigar los disturbios. La respuesta social combinó una campaña de desobediencia civil de seis meses de huelgas generales y boicots escolares que significaron todo un año escolar perdido. Aunque el Gobierno camerunés llevó a cabo algunas medidas para distender la situación (retirada de cargos y

liberación de los líderes anglófonos detenidos en enero), la declaración de independencia el 1 de octubre y la proclamación de la República Federal de Ambazonia, que agrupa a las dos regiones anglófonas, aceleraron los acontecimientos. En vísperas del 1 de octubre (fecha en que se conmemora el Día de la Unificación camerunesa), el Gobierno realizó un intenso despliegue de cuerpos de seguridad, impuso restricciones de circulación y reunión y cortó el acceso a las redes sociales. Decenas de miles de personas se manifestaron y el 1 de octubre proclamaron la independencia de la región, conocida como Ambazonia, lo que contribuyó a alimentar una respuesta represiva del Gobierno central, día en el que se produjeron decenas de muertes como consecuencia de la intervención represiva. Los movimientos secesionistas formaron un gobierno interino, nombraron a Julius Ayuk Tabe como nuevo presidente interino y éste nombró a su gabinete en el exilio.

La represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de Camerún provocaron decenas de víctimas mortales y exacerbaron los llamamientos a promover la secesión de ambas regiones respecto de Camerún. Aunque en octubre hubo varios llamamientos al diálogo por parte del Gobierno central, entre noviembre y diciembre se produjo un incremento significativo de la violencia en estas regiones. Los militantes secesionistas llevaron a cabo diversos ataques a puestos de control y se produjeron explosiones, incendios de colegios y operaciones de búsqueda de armas en domicilios de supuestos miembros del movimiento secesionista, algunos de los cuales se encontraban en búsqueda y captura. En el campo de la insurgencia, se produjo el reclutamiento de combatientes y se organizaron campos de entrenamiento en las zonas fronterizas con Nigeria, y surgió una proliferación de pequeñas milicias que han llevado a cabo ataques a pequeña escala y otras tres milicias con una mayor envergadura, la Ambazonia Defence Forces (ADF) liderada por Ayaba Cho Lucas y Ben Kuah, las Southern Cameroons Defence Forces (SOCADEF) lideradas por Ebenezer Derek Mbongo Akwanga, y el grupo homónimo Southern Cameroons Defence Forces (SCDF) liderado por Nso Foncha Nkem. La violencia no se circunscribió a las provincias de North West y South West sino que también alcanzó la capital, Yaoundé. A principios 2018 el presidente, Ayuk Tabe, y otros seis miembros de su Gobierno interino fueron detenidos en Nigeria y permanecen en custodia en un hotel de Abuja. En los últimos meses del año las relaciones bilaterales entre Nigeria y Camerún se tensionaron ante la huida hacia Nigeria de miles de cameruneses como consecuencia de la violencia. En diciembre tropas camerunesas penetraron en territorio nigeriano en persecución de los rebeldes sin la autorización nigeriana, lo que derivó en un conflicto diplomático entre ambos países. El think tank ICG hizo un llamamiento

La represión y el uso excesivo de la fuerza contra el movimiento secesionista por parte de las autoridades de Camerún provocó un aumento de los partidarios de la lucha armada para alcanzar la secesión

a implementar reformas y promover un diálogo inclusivo y de alto nivel promovido por la ONU o la UA.

Níger	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)

Síntesis:

En el año 2009 un golpe de Estado acabó con el Gobierno de Mamadou Tandja, después de que éste iniciara una serie de reformas constitucionales para mantenerse en el poder. Posteriormente, las elecciones de enero y marzo de 2011 restauraron el sistema democrático en el país después de que la Junta Militar cumpliera con el calendario establecido para el retorno del poder a la sociedad civil. Pese a la normalización de la situación en el país persiste la inestabilidad generada por la creciente presencia de células del grupo armado argelino AQMI y otros grupos armados que operan en la región de Sahel así como la extensión del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de las actividades del grupo armado nigeriano Boko Haram.

Durante el año se mantuvo el clima de inseguridad en varias regiones fronterizas del país debido a ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista.

La región sureña de Diffa, fronteriza con Nigeria, siguió padeciendo los ataques de la insurgencia nigeriana de Boko Haram.¹³ El Gobierno acordó el 4 de mayo la creación la fuerza militar conjunta contra insurgente Sahel G5 junto con otros países de la región (Malí, Chad, Mauritania y Burkina Faso) y que entraría en acción a finales de año. La fuerza conjunta Sahel G5 llevó a cabo su primera operación en la zona fronteriza entre Malí-Níger-Burkina Faso entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre, involucrando tropas de los tres países. La continuidad de los ataques de Boko Haram (BH) obligó al Gobierno a extender el estado de emergencia en la región durante todo el año, el cual había sido decretado dos años antes. Entre las acciones más relevantes del año, cabe destacar la muerte de 57 combatientes de BH en Gueskerou en abril a manos de tropas chadianas y nigerianas y de 39 combatientes de BH cerca de Barwa, en la región de Diffa, en agosto, a manos de tropas nigerinas. La derrota de BH en su feudo en Sambissa implicaba que en el futuro la situación en Níger dependería del grado de reorganización del grupo en Borno, estado de Nigeria. En octubre, Chad completó la retirada de sus tropas de la región de Diffa anunciada a finales de septiembre, oficialmente para reforzar su presencia en el norte de Chad, por lo que

13. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

el Gobierno nigerino decretó que la región de Diffa se había convertido en una zona prohibida a la presencia occidental, temiendo que se cometieran secuestros.

Por otro lado, las zonas fronterizas con Burkina Faso y Malí (regiones de Tillabéri y Tahoua), al oeste del país, también sufrieron durante diversos momentos del año la presión de diferentes movimientos armados vinculados con al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos de corte yihadista. El Gobierno decretó el estado de emergencia en la zona el 3 de marzo y lo fue renovando durante el año. En este sentido, cabe destacar que en marzo se dio a conocer que AQMI, Ansar Dine, Macina Liberation Front y al-Mourabitoun habían fusionado sus organizaciones creando “Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen, o Nusrat al-Islam (Apoyo al Islam y a los Musulmanes), bajo el liderazgo de Iyad -Ag Ghali, hasta entonces líder de Ansar Dine. Estas organizaciones siguieron activas llevando a cabo ataques y emboscadas en las áreas rurales en la zona fronteriza con Malí. A finales de 2016 se constató la presencia de ISIS en la misma área, también teniendo como objetivo patrullas policiales, cuestión que se constata desde 2014 cuando algunas facciones de AQMI prometieron lealtad a ISIS. Una de las acciones más destacadas del yihadismo en esta zona fue la emboscada perpetrada por Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) el 4 de octubre en la localidad de Tongo Tongo, en la región de Tillabéri, contra una patrulla militar conjunta de Níger y EEUU, en la que murieron cinco soldados nigerinos y cuatro estadounidenses, y el 21 de octubre murieron 13 gendarmes en una emboscada en la gendarmería de Ayrou, en la región de Tillabéri. Cabe reseñar que el Gobierno y EEUU alcanzaron un acuerdo el 2 de diciembre por el que se autorizaba a EEUU llevar a cabo ataques con aviones no tripulados contra los grupos armados en el país.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas

alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

Persistió el elevado clima de inestabilidad y violencia en diversas regiones del país, destacando la campaña militar contra Boko Haram en el noreste¹⁴, **las acciones de violencia de las comunidades ganaderas fulani contra comunidades agrícolas en el cinturón central del país (middle belt)** y **las crecientes tensiones y reactivación de la violencia en el Delta del Níger y en la región de Biafra**, lo que contribuyó a deteriorar la situación de seguridad en el conjunto del país. Por último, la marcha a Reino Unido del presidente Buhari por enfermedad entre junio y agosto fue un factor de fragilidad. La violencia intercomunitaria entre pastores nómadas procedentes del norte de Nigeria y las comunidades agrícolas del centro y sur del país continuó presente, siguiendo la tendencia de los últimos años, sobre todo coincidiendo con la temporada seca, entre septiembre y mayo, que provoca el desplazamiento de comunidades ganaderas hacia el sur del país incrementando la presión sobre los recursos y suponiendo un factor de inestabilidad. Desde el año 2011, según un informe del think tank ICG de septiembre, se han producido unas 2.000 víctimas mortales al año, y en el año 2016 murieron aproximadamente 2.500 personas como consecuencia de los enfrentamientos y las represalias. Las reacciones de los estados sureños a estas incursiones no han sido conciliadoras y, en este sentido, a finales de 2016 el estado de Bayelsa rechazaba una ley federal para establecer reservas para pastoreo en todo el país, y los estados de Abia y Ekiti aprobaron leyes anti-pastoreo. El Gobierno, poco activo para intentar frenar la evolución de la situación, según el ICG, intentó hacer frente a la persistencia de la violencia durante el año llevando a cabo consultas con líderes fulani. Con el inicio de la nueva estación seca en septiembre se reactivaron los conflictos. El 31 de octubre el estado de Benue introdujo una ley similar a los estados de Abia y Ekiti, con el objetivo de desalentar nuevos ataques pero a la vez provocó un éxodo de la comunidad fulani de ese estado hacia los vecinos Nasarawa y Cross River, lo que comportó que a su vez, el estado de Taraba también considerara la aprobación de una legislación similar en 2018. Estados sureños como Delta, Abia y Ogun, se vieron también afectados por las actividades de las milicias fulani. En diciembre el vicepresidente Osinbajo se reunió con líderes fulani para intentar frenar la escalada de la violencia.

En la región sureña de Biafra las tensiones entre el Estado y los movimientos pro secesionistas, reiniciadas en agosto de 2015 por la detención del líder secesionista Nnamdi Kanu, líder de Indigenous People of Biafra (IPOB), se incrementaron a lo largo del año. Se llevaron a cabo acciones y movilizaciones de cara a la celebración

14. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

del 50° aniversario de la guerra secesionista de Biafra. Los cuerpos de seguridad intervinieron con dureza para reprimir las acciones del movimiento secesionista de Biafra, agravando el clima de abusos contra los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil de Biafra convocaron un parón el 30 de mayo para conmemorar el mencionado 50° aniversario, que fue secundado en los estados del sudeste. Ello vino acompañado de un incremento del rechazo contra la comunidad igbo en el resto del país, hasta el punto de que el 6 de junio 16 organizaciones juveniles del norte denunciaron el parón y exigieron a la comunidad igbo esparcida por el norte que lo abandonara antes del 1 de octubre. Este ultimátum fue condenado por numerosos líderes del norte, sin embargo, ocho organizaciones activistas del Delta exigieron el 10 de junio que el gobierno reasignara los bloques petroleros de los norteños al pueblo del delta del Níger y que todos los norteños abandonaran la región antes del 1 de octubre. El 14 de septiembre el Ejército asaltó la residencia de Nnamdi Kanu, líder de Indigenous People of Biafra (IPOB) en Umuahia, la capital del estado de Abia, y aunque el Ejército negó haberle retenido, a principios de 2018 permanecía desaparecido. Además, el 20 de septiembre el Gobierno declaró IPOB organización terrorista.

Aumentaron las tensiones en la región de Biafra entre el Gobierno y los movimientos secesionistas en el marco de la celebración del 50° aniversario de la declaración de la República de Biafra

La escalada de la violencia que afectó la región sureña del Delta del Níger en 2016 persistió durante 2017.

Con la llegada del presidente Buhari al poder, en mayo de 2015, hubo un cambio de enfoque en las políticas hacia el Delta, así como una reducción del presupuesto para implementar los acuerdos de paz impulsados desde 2009 (DDR, programa de amnistía) lo que sumado a los pocos avances en hacer frente al subdesarrollo y las desigualdades en la región provocaron una escalada de la violencia desde 2016.

Así, durante el año se produjeron numerosos actos de criminalidad contra los oleoductos y diversos grupos armados amenazaron durante todo el año con reanudar los ataques contra las infraestructuras petroleras, e incluso hubo acciones esporádicas por parte de los grupos insurgentes que fueron reprimidas causando decenas de víctimas mortales durante todo el año. La organización del Delta, el Pan-Niger Delta Forum (PANDEF) instó durante todo el año a poner en marcha las medidas que habían propuesto en noviembre de 2016 al presidente Buhari y en agosto el presidente en funciones Osinbajo se reunió con el PANDEF para discutir los planes del Gobierno federal para desarrollar la región, aunque los grupos armados desconfiaron de las conversaciones y amenazaron con reactivar los ataques si no se producían resultados concretos de los diálogos entre PANDEF y el Gobierno. A mediados de noviembre el presidente Buhari visitó por primera vez desde que alcanzó el poder en marzo de 2015 los estados Ebonyi y Anambra.

Nigeria (Delta Níger)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada

Síntesis:

La inestabilidad en el Delta del Níger es fruto de la pérdida de los medios de vida de la población debido a la actividad petrolera en la zona. La falta de compensaciones económicas, desarrollo y la marginalización de las comunidades llevó a exigir una mayor participación en los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo. Desde los años noventa, surgieron formaciones armadas que propiciaron ataques contra instalaciones petroleras y puestos militares, además del secuestro de trabajadores. La respuesta del Gobierno fue militar, con la presencia permanente de las fuerzas especiales en la región del Delta, acusadas de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. En 2009 el Gobierno decretó una ley de amnistía para todos los grupos armados que decidieran dejar la lucha armada. El ofrecimiento de programas de reinserción animó a los líderes de muchas de estas formaciones a deponer las armas, lo que generó una reducción pronunciada de la violencia armada en la zona. Sin embargo, el estancamiento de los proyectos de reinserción y desarrollo prometidos por el Gobierno ha vuelto a propiciar el retorno a la lucha armada por algunos actores.

Cuerno de África

Eritrea	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos

Síntesis:

El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindican el árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinización, que lleva a cabo el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ, por sus siglas en inglés), que controla

todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab.

Durante el año 2017 no se produjeron hechos destacables en Eritrea que permitan intuir un cambio en la situación. Alrededor del 12% del país ha huido como consecuencia del régimen opresivo y del prolongado servicio militar obligatorio. Solo en 2016, 52.000 personas huyeron del país, según UNHCR. El hecho más destacable del año tuvo lugar el 31 de octubre, cuando **la Policía dispersó una excepcional protesta en Asmara después de que fuera arrestado el director de una escuela islámica** por oponerse a las demandas de prohibición de uso del hijab y contra la educación religiosa. Se produjeron tiroteos según fuentes de la embajada de EEUU en Eritrea y **activistas afirmaron que la Policía había ejecutado a 28 personas y otras 100 habrían resultado heridas**, según fuentes de la agencia AP en Etiopía, aunque esta información fue desmentida por el Gobierno eritreo. Tras estos hechos, las autoridades bloquearon internet y arrestaron a centenares de estudiantes en conexión con la protesta, además de desplazar contingentes militares hacia la capital. En paralelo, en marzo, el Gobierno etíope anunció que había repelido un ataque de unos 20 miembros del grupo con base en Eritrea Benishangul Gumuz People's Liberation Movement (BPLM), que pretendía atacar la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) el 28 de febrero. En el ataque murieron 13 combatientes del BPLM, mientras que los siete restantes buscaron refugio en Sudán, según fuentes etíopes recabadas por Newsweek. El 2 de marzo el Gobierno etíope acusó a Eritrea de entrenar, armar y dirigir dicho grupo, información que Asmara desmintió. No obstante, el número de contacto del manifiesto disponía de prefijo eritreo. Benishangul Gumuz es una región en el oeste de Etiopía, fronteriza con Sudán. El BPLM forma parte de una coalición de grupos opuestos a Etiopía, la Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD), según un anuncio que hizo la PAFD en 2015.

Finalmente, a raíz de la retirada de la misión de Qatar de monitoreo del alto el fuego en la península de Ras Doumeira a mediados de junio, el 16 de junio Eritrea desplegó sus tropas en el territorio. Esta zona se encuentra en disputa entre Djibouti y Eritrea desde que en 2008 se enfrentaran por su control, hecho que provocó la mediación de Qatar. Este país, dos años después, en 2010, estableció una misión de interposición en la zona que ha estado presente desde entonces, sin que se haya resuelto el contencioso fronterizo. En consecuencia, Djibouti se dirigió a la UA para buscar su apoyo de cara a resolver el contencioso territorial y solicitar el envío de observadores a la zona en disputa. Eritrea señaló que solo reconocería a Qatar como posible mediador en el contencioso.

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión.

Persistió el clima de inestabilidad y de movilización social contra el régimen etíope iniciado en noviembre de 2015, y que ha causado la muerte de centenares de personas. No obstante, a principios de agosto el Gobierno levantó el estado de emergencia tras 10 meses de vigencia, desde octubre de 2016, y que había permitido la detención de miles de activistas y restricciones a la libertad de movimiento y comunicaciones, según destacó HRW en agosto. **De las 23.000 personas arrestadas, 8.000 se encontraban a la espera de juicio o estaban siendo juzgadas. Sin embargo, lo que ha sido calificado como la mayor movilización antigubernamental de la última década continuó activa como consecuencia de la represión de las protestas por parte del Gobierno.** Entre los motivos iniciales de la movilización se encuentran agravios acumulados entre las diferentes comunidades del país y que tienen sus raíces en el devenir autoritario del Estado desde 1991, además de las protestas derivadas contra el Plan de Desarrollo Integrado de Addis Abeba y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan), y que fueron reprimidas con dureza causando decenas de víctimas, lo que provocó

el abandono del Plan por parte del Gobierno en enero de 2016.¹⁵

El 4 de agosto se levantó el estado de emergencia. Sin embargo, aunque las detenciones en masa habían comportado el retorno a una cierta normalidad en el marco de los poderes derivados de la aplicación del estado de emergencia, la reanudación de las protestas y las movilizaciones alcanzaron unos niveles similares a los que condujeron a la declaración del estado de emergencia en octubre de 2016 pusieron de manifiesto el fracaso del Gobierno etíope en corregir las preocupaciones de las movilizaciones de protesta y en abrir el espacio político a la oposición, según señaló el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).¹⁶ Además, aunque durante la vigencia del estado de emergencia la violencia para aplacar las protestas remitiera debido a la prohibición de llevar a cabo movilizaciones, los enfrentamientos y operaciones militares por de la Policía Liyu en zonas remotas de la región de Oromiya, el epicentro de la rebelión, se incrementaron en frecuencia y letalidad.¹⁷ Diversos líderes opositores continuaron bajo arresto y las fuerzas de seguridad siguieron actuando con impunidad. Además, la actividad militante se incrementó a la par con los disturbios populares. ACLED destacó que desde noviembre de 2015 alrededor de 1.200 civiles fueron ejecutados durante las protestas por parte de los cuerpos de seguridad en el país, y otras 2.000 personas murieron en brotes de violencia y conflictos no directamente relacionados con las protestas, como enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos rebeldes y milicias, o por situaciones de violencia por parte de estos grupos insurgentes contra la población civil.

Las acciones de la Policía Liyu en la región de Oromiya causaron más de 400 muertos entre enero y noviembre de 2017

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO
Síntesis:	Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El oromo OLF surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un

Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En diversas ocasiones ha colaborado con el ONLF de Ogadén en acciones contra el Gobierno central.

Persistió el clima de inestabilidad iniciado en noviembre de 2015 que ha causado la muerte de centenares de personas en la región de Oromiya, epicentro de las protestas contra el régimen etíope.

Aunque durante el año se redujeron las protestas contra el régimen en el marco de la dura aplicación del estado de emergencia, vigente desde octubre de 2016 hasta agosto de 2017, la violencia por parte de los cuerpos de seguridad se incrementó en zonas remotas de la región. Este conflicto tiene su origen en las protestas estudiantiles iniciadas en 2014 y que escalaron a finales de 2015 forzando en enero de 2016 la retirada por parte del Gobierno de los planes de desarrollo de la capital, Addis Abeba, y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan). Este plan preveía la expansión de la capital a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, que pasarían a formar parte de Addis Abeba. El Master Plan pretendía organizar el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad, aunque suscitó numerosas críticas por su impacto en la región de Oromiya y por la marginación del pueblo oromo en su diseño.¹⁸

Así, durante el año 2017 Oromiya sufrió un incremento de las actividades militares de la Policía Liyu ("Policía Especial"). La Policía Liyu¹⁹ fue creada para llevar a cabo acciones contra los grupos opositores en Ogadén, y su actividad se concentra en esta región, aunque en los últimos años también ha dado apoyo a las acciones de la misión de la UA en Somalia (AMISOM) en la zona fronteriza entre ambos países y, sobre todo, ha ampliado sus actividades en el territorio de la región de Oromiya desde diciembre de 2016, donde ha sido acusada de perpetuar graves violaciones de los derechos humanos contra comunidades en zonas fronterizas. Aunque durante la vigencia del estado de emergencia la violencia para aplacar las protestas remitiera debido a la prohibición de llevar a cabo movilizaciones, los enfrentamientos y

15. Véase "El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017), en Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Icaria, Barcelona.
16. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.
17. Véase el resumen sobre Etiopía (Ogadén) en el capítulo 1 (Conflictos armados) y el resumen de Etiopía (Oromiya) en este capítulo.
18. Véase el resumen sobre Etiopía en este mismo capítulo y "El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias", en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017), en Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.
19. En 2008, la Policía Liyu se convirtió en un grupo contrainsurgente poderoso y liderado por el jefe de seguridad de la región, Abdi Mohammed Omar, conocido como Abdi Illey, quien en 2010 se convirtió en presidente de la región de Somalí, aunque la Policía Liyu continuó bajo su mando. HRW, *Ibid*.

operaciones militares por de la Policía Liyu en zonas remotas de la región de Oromiya, se incrementaron en frecuencia y letalidad. Centenares de personas fueron detenidas durante el año. Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),²⁰ se produjeron 64 ataques y enfrentamientos entre milicias de la región de Oromiya y la Policía Liyu entre enero y noviembre de 2017 en los que habrían muerto 434 personas. A esto se sumaron los brotes esporádicos de violencia y enfrentamientos entre comunidades ganaderas oromo y somalíes a lo largo de la frontera entre las regiones de Oromiya y de Somalí, aunque la participación de Policía Liyu para aplacar estos brotes elevó los niveles de violencia y las sospechas de la oposición política de Oromiya, ya que la comunidad oromo identifica el incremento de la actividad de la Policía Liyu como una forma indirecta del Gobierno para usurpar las tierras pertenecientes a la comunidad oromo y anular aún más a la disidencia, según destacó ACLED.²¹ Fuentes oficiales del gobierno regional anunciaron en septiembre que los enfrentamientos habrían provocado el desplazamiento de 55.000 oromos de la región somalí. Ante el incremento de la violencia la UE hizo un llamamiento a que se creara una comisión para investigar los hechos, y el Parlamento regional manifestó su preocupación y creó una comisión de investigación.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la

propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia, que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya, y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le sumó en 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

El país continuó inmerso en un grave clima de tensión y violencia, destacando la creciente tensión y movilización política vinculada a la celebración de las **elecciones en 2017**, las acciones del grupo armado islamista **al-Shabaab**, las **operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad**, la **creciente presencia de ISIS desde 2016** en el país y **los persistentes enfrentamientos de carácter intercomunitario**. Así, el grupo armado islamista de origen somalí al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques insurgentes en el noreste de Kenya, en concreto en la zona fronteriza entre Somalia y Kenya (los condados de Mandera, Wajir y Garissa) y en la zona costera de Kenya (condado de Lamu y en Mombasa), que causaron decenas de víctimas mortales durante todo el año. Además, se constató un incremento de las actividades del al-Shabaab en vísperas de las elecciones que tuvieron lugar en el país el 8 de agosto como consecuencia de un aumento de bombardeos aéreos sobre feudos del grupo.

Respecto al proceso electoral de agosto, el clima de tensión política y movilización social fue en aumento durante todo el año. Murieron decenas de personas en enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y opositores políticos, así como entre simpatizantes y opositores de la coalición gubernamental. La jornada electoral del 8 de agosto, celebrada en medio de un clima de alta tensión, estuvo plagada de irregularidades y fue calificada de fraudulenta hasta el punto que el Tribunal Supremo aceptó las reclamaciones y anuló los resultados, en una decisión histórica, y ordenó la celebración de nuevas elecciones el 26 de octubre. El presidente en funciones, Uhuru Kenyatta, realizó movilizaciones de protesta y condenó la decisión del tribunal, aunque previamente ya había afirmado que respetaba sus decisiones. Ante la ausencia de mejoras respecto a las condiciones que facilitaron el fraude electoral en las elecciones de agosto, el líder opositor, Raila Odinga, y su coalición opositora, NASA, boicotearon las elecciones de octubre, en las que Uhuru Kenyatta obtuvo la victoria para un segundo y último mandato de cinco años. Kenyatta ganó con el 98% de los votos y una participación de solo el 38%, claramente inferior al 80% de participación registrado en las elecciones de agosto, por lo que también generó dudas sobre su legitimidad. El derrotado Raila Odinga amenazó con autoproclamarse presidente y formar gobierno el 12 de diciembre, coincidiendo con el Día

20. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.

21. Armed Conflict Location & Event Data Project's, Conflict Trends Num. 60, Julio de 2017. *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.

de la Independencia, aunque las presiones regionales e internacionales le hicieron posponer esta decisión. NASA hizo un llamamiento a iniciar una campaña de desobediencia civil con el objetivo de conseguir la convocatoria de unas nuevas elecciones. El país acabó el año en un clima de movilizaciones y alta polarización social tan grave como el que en el ciclo electoral de diciembre de 2007 desencadenó la muerte de más de 1.000 personas y el desplazamiento forzado de centenares de miles, según diversos análisis.

Organizaciones locales e internacionales denunciaron durante diciembre la muerte de decenas de personas en enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y simpatizantes opositores. **HRW detalló los actos de violencia sexual y otras graves violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos durante el ciclo electoral y los impactos de género que habían supuesto**, muchos de los cuales fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad.²² La Kenyan National Commission on Human Rights documentó la muerte de 92 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos políticos y por la actuación policial, y por otro lado también constató la existencia de un mínimo de 86 casos documentados de violencia sexual durante el periodo electoral. En este sentido, cabe destacar el incremento del número de muertes a manos de la Policía en el año 2017 según desveló Deadly Force.²³ En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016 y a 243 en 2017, lo que supone un aumento del 41% en dos años. Por último, cabe destacar los diferentes enfrentamientos entre milicias vinculadas a diferentes comunidades durante todo el año, por cuestiones de robos de ganado, represalias por ataques previos y usos y propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones.

Las elecciones en Kenya de agosto, plagadas de irregularidades, fueron anuladas y pospuestas por el Tribunal Supremo lo que supone una decisión histórica

Grandes Lagos y África Central

África Central (LRA)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Recursos Internacional
Actores:	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka

22. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

23. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto, de Nation Newsplex, proyecto del rotativo keniano Daily Nation, busca registrar todas las muertes de resultantes de operaciones policiales en Kenya, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

24. Véase Invisible Children – Resolve, *LRA Crisis Tracker*, 13 de enero de 2018.

Síntesis:

El LRA nació en 1986, movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph Kony, con el objetivo de derrocar al Gobierno de Uganda, instaurar un régimen basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y sacar de la marginación a la región norte de este país. La violencia y la inseguridad causada por los ataques del LRA contra la población civil, el secuestro de menores para engrosar sus filas (alrededor de 25.000 desde el inicio del conflicto) y los enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas (junto a las milicias de autodefensa) han provocado la muerte de unas 200.000 personas y el desplazamiento forzado de alrededor de dos millones en el momento más álgido del conflicto. La creciente presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas ugandesas forzó al grupo a refugiarse primero en el sur de Sudán, posteriormente en RDC, y finalmente en RCA. Así, el LRA fue ampliando sus actividades a los países vecinos donde estableció sus bases, por la incapacidad para frenarle en RDC y RCA, y por la complicidad de Sudán. Entre 2006 y 2008 se celebró un proceso de paz que consiguió establecer un cese de hostilidades, aunque fracasó y en diciembre de 2008 los Ejércitos ugandés, congolés y sursudanesés llevaron a cabo una ofensiva contra el LRA, lo que provocó la disgregación del grupo hacia el noreste de RDC, el sureste de RCA y el suroeste de Sudán del Sur, donde continuó su ofensiva. En noviembre de 2011 la UA autorizó la creación de una fuerza regional transfronteriza compuesta por contingentes militares de estos tres países que se desplegó en septiembre de 2012 y que cuenta con el apoyo logístico de EEUU. La reducción sostenida de la violencia en los últimos años ha provocado que deje de ser considerado conflicto armado a principios de 2015.

Durante el año continuaron las actividades del grupo armado LRA y las operaciones militares para desarticular al grupo en el triángulo formado entre la RCA, RDC y Sudán del Sur. Las zonas más afectadas fueron el este de RCA (Haut Kotto, Mbomou y Haut Mbomou) y el noreste de RDC (las provincias de Haut Uélé y Bas Uélé y el parque nacional de Garamba), ya que del lado sursudanesés de la zona fronteriza entre RDC y Sudán del Sur no se constataron actos de violencia por parte del LRA. **Según el proyecto LRA Crisis Tracker se contabilizaron 125 incidentes violentos durante el año (200 en 2016), en los que murieron 14 civiles (22 en 2016) y fueron secuestrados temporalmente o permanentemente 406 personas (729 en 2016), lo que supone una reducción general de las actividades cometidas por el LRA.**²⁴ El parque nacional de Garamba siguió siendo un centro clave de la caza furtiva y la extracción de oro para el LRA. La mayoría de las actividades de los subgrupos del LRA activos consistieron en saqueos, emboscadas, secuestros temporales y violencia sexual. La estación seca, que se extiende de marzo a junio, coincidió con la intensificación de los incidentes atribuidos al LRA.

El 29 de marzo EEUU anunció que ponía fin a la Operación *Observant Compass*, de apoyo a la AU-Regional Task Force que llevaba a cabo operaciones de contrainsurgencia contra el LRA debido a que el grupo se había visto ostensiblemente debilitado en los últimos años, pasando a disponer de un centenar de combatientes. El coste de la misión, según HRW, también fue un factor determinante de cara a la retirada de la misión. Uganda, país sobre el que recaía el peso de la operación, también anunció su retirada de misión regional, y en mayo la seguridad del sureste de RCA fue formalmente entregada a los cuerpos de seguridad de la RCA. Aunque el grupo ya no supone una amenaza militar, diversas organizaciones centroafricanas alertaron que la retirada podía tener consecuencias negativas para la población civil, ya que las milicias ex Séléka podrían ocupar el vacío de seguridad. La disminución de ataques por parte del LRA en los últimos tiempos se ha visto sustituida por los secuestros de civiles, lo que implica nuevos enfoques para la protección de los civiles. Los ataques contra la MINUSCA por los grupos armados restringieron la capacidad de la misión de responder a los incidentes en las zonas afectadas por el LRA. El 4 de julio, la Task Forces finalizó su retirada de Yambio, en Sudán del Sur y trasladó su cuartel general a Koboko (Uganda).

En la región de Cabinda, Angola, persistió la escalada de la tensión y la violencia iniciada en 2016

Se mantuvo el clima de tensión y de incidentes esporádicos de violencia iniciado en 2016 en el enclave de Cabinda, en paralelo al incremento de la tensión en el conjunto del país derivado de las elecciones legislativas y presidenciales y de las movilizaciones y protestas vinculadas a demandas económicas y sociales. A raíz del anuncio del retorno a las hostilidades realizado el 18 de febrero de 2016, debido a la negativa del Gobierno a retomar las conversaciones de paz, se registraron los peores incidentes en el enclave de Cabinda en años, que acciones que continuaron durante 2017. No obstante, diversos analistas señalaron que la muerte de Nzita Tiago en 2016 había dejado un vacío en el liderazgo del grupo que podría ser aprovechado por facciones más beligerantes del grupo para incrementar las acciones contra los cuerpos de seguridad angolanos. Así, durante el año se registraron diferentes enfrentamientos armados **entre el FLEC-FAC y las Fuerzas Armadas angolanas**. El Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) confirmó que se produjo un aumento significativo de las protestas, movilizaciones y de la violencia contra civiles entre el año 2016 y el 2017, aunque existen dificultades para contabilizar las bajas reales porque el Gobierno de Angola siguió desmintiendo las informaciones relativas a un incremento de la violencia en el enclave.

Angola (Cabinda)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo

Síntesis:

Tras la independencia de Angola de Portugal en 1975, el enclave de Cabinda, separado geográficamente del resto del territorio angolano, quedó incorporado a Angola en el tratado de independencia, el cual contó con la firma de los principales movimientos para la independencia del país (MPLA, UNITA y FNLA), pero no con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC). Desde ese momento, el FLEC, quien ya había luchado contra la ocupación extranjera de Portugal, ha mantenido la lucha armada contra el Estado angolano por la independencia del enclave. En el año 2002, y tras el final de la guerra civil post colonial, el movimiento secesionista había quedado bastante reducido, manteniéndose la violencia de manera esporádica. En el 2006 una sección del FLEC y el Gobierno firmaron un alto el fuego a cambio de una repartición mayor de los ingresos petrolíferos para Cabinda –región que produce más de la mitad del crudo nacional– que fue rechazado por la facción del FLEC-FAC (Fuerzas Armadas de Cabinda) comandada por N’Zita Tiago, que ha mantenido las reclamaciones secesionistas.

Entre las acciones más relevantes, el FLEC-FAC reportó diversas emboscadas entre las que destaca la muerte de siete soldados en un ataque el 19 de junio en la zona de Buco-Zau y la muerte de ocho soldados el 28 de febrero en Munenga. La acción más destacada del año se produjo entre el 3 y el 10 de febrero en Necuto, con un saldo de 18 soldados muertos y otros 10 que resultaron heridos. En febrero, el movimiento insurgente hizo un llamamiento a la población local a boicotear las elecciones de agosto y el comandante Alfonso Nsau reiteró que no aceptaría ninguna presencia extranjera en el territorio y alertó a los partidos políticos del país a no realizar campaña electoral en Cabinda. Las elecciones fueron ganadas sin sorpresas por Joao Lorenço, el candidato del MPLA a suceder al presidente José Eduardo Dos Santos, quien llevaba en el poder desde 1979. No obstante, a pesar de las acusaciones de fraude electoral –cuatro partidos hicieron un llamamiento en septiembre para que se hiciera un recuento– el MPLA obtuvo menos escaños que en las elecciones anteriores, 150 de los 220 escaños, mientras que en 2012 obtuvo 175 de los 220 escaños y en 2008 191 de 220. Así mismo, ACLED destacó que en 2017 se quintuplicaron el número de protestas respecto a las elecciones de 2012 y además se produjo un incremento de presión sobre la disidencia con la detención de activistas y periodistas. Por último, cabe destacar el incremento de la tensión en la región de Lunda, donde diversos grupos se movilaron exigiendo una mayor autonomía para la región.

Chad	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria.

Chad continuó afectado por la grave crisis política y social vinculada a la crisis económica como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, y a las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.²⁵ Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de fragilidad e inestabilidad social. La economía chadiana siguió estando bajo gran presión a causa de los elevados gastos de seguridad en un contexto de disminución de los ingresos procedentes del petróleo, lo que dio lugar a una tensa situación social. Los intentos de diálogo entre el Gobierno y la oposición política y social fueron infructuosos. En paralelo, en lo relativo al conflicto regional con la insurgencia de Boko Haram, aunque las acciones armadas insurgentes y contrainsurgentes fueron de baja intensidad durante el año, cabe destacar los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el 23 y el 25 de junio entre el Ejército chadiano y los militantes del grupo en una serie de islas del Lago Chad en la región de Bol, que causaron 170 víctimas mortales (162 militantes y ocho soldados chadianos), la cifra más alta de víctimas mortales en el país de la última década.

Congo, Rep. del	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, el país se ha visto sometido a un clima de inestabilidad y violencia política. Denis Sassou-Nguesso lo gobernó desde 1979 –a través de un golpe de Estado militar– hasta 1992, etapa de régimen de partido único de ideología marxista-leninista. Tras el colapso del bloque comunista y de la Unión Soviética, y por presiones de su principal aliado, Francia, inició la transición a la democracia, estableciendo un sistema multipartidista que celebró elecciones en 1992 en las que fue Sassou-Nguesso derrotado por Pascal Lissouba. El país ha sido víctima de diversos conflictos armados (1993-1994, 1997-1999). Entre junio de 1997 y diciembre de 1999 se desencadenó una guerra civil entre las fuerzas de los dos candidatos a la presidencia, Nguesso y Lissouba. En paralelo al conflicto político entre Lissouba y Sassou-Nguesso, también jugaron un papel determinante los intereses franceses en el petróleo congolés. Brazzaville resultó destruida por la guerra y la multitud de milicias que competían por el poder. Entre ellas, las milicias Ninjas leales a Frédéric Bintsamou (pastor Ntoumi) y al líder político Bernard Kolélas, primer ministro tras el acuerdo de paz que puso fin al conflicto entre 1993 y 1994; las milicias Cocoyes, del presidente derrocado Lissouba; y las Cobras, del presidente golpista Nguesso. El apoyo de Francia a Nguesso fue un factor crucial en esta guerra, que terminó con la invasión de las tropas de Angola y el retorno de Nguesso al poder, el cual continúa en el cargo hasta la actualidad. Los Ninjas del reverendo Ntoumi siguieron activos en su feudo, la región de Pool, y se enfrentaron a Nguesso entre 2002 y 2003. Los intentos de Nguesso de reformar la Constitución para facilitar su permanencia en el poder, provocaron importantes movilizaciones en su contra protagonizadas por el movimiento #Sassoufit, creado en 2014, en referencia al lema de las movilizaciones.

Persistió la inseguridad y la violencia esporádica en la región de Pool iniciada en 2016. Durante el año se produjeron acciones por parte de los cuerpos de seguridad contra las milicias del reverendo Ntoumi y persistió la inseguridad en la región de Pool. **El país se encuentra inmerso en un nuevo ciclo de inestabilidad política** desde que el Gobierno promoviera la reforma constitucional en octubre de 2015 que levantaba el límite de dos mandatos presidenciales, lo que permitió al presidente, Denis Sassou-Nguesso (74 años), presentarse a un nuevo mandato presidencial en marzo de 2016, que venció ampliamente. Generó preocupación la detención prolongada sin juicio de dirigentes políticos tras las elecciones presidenciales. A pesar de que el Gobierno anunció que garantizaría la celebración de juicios justos, a finales de 2017 todavía debían celebrarse las audiencias iniciales para los dos ex candidatos a la presidencia, Jean-Marie Michel Mokoko y André Okombi Salissa. En agosto, el Gobierno autorizó la evacuación médica a Francia de otro líder de la oposición detenido, Modeste Boukadia, que había sido condenado a 30 años de trabajos forzados.

En relación al conflicto en la región de Pool, una de las acciones más destacadas del año fue la operación que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad en marzo en la que se enfrentaron a una milicia, causando la

25. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

muerte de 15 combatientes, que según el Gobierno planeaban boicotear las operaciones de construcción de la vía férrea Congo-Ocean. En diversos momentos del año la situación de inseguridad congeló las operaciones de construcción de esta vía férrea, que debe conectar Brazzaville con Pointe Noire, el principal eje económico del país. La ONU anunció en julio que 81.000 personas se encontraban desplazadas como consecuencia de la violencia y la inseguridad en la región de Pool desde 2016. Además, la situación humanitaria de unas 138.000 personas se vio afectada por la violencia y la inseguridad en la región, y en julio de 2017 la OCHA hizo un llamamiento de 23,7 millones de dólares para hacer frente a la situación humanitaria en la zona. El conflicto provocó la cancelación de las elecciones parlamentarias en julio en nueve de las 14 circunscripciones electorales de la región. No obstante, a mediados de noviembre el Gobierno liberó a algunas figuras cercanas al reverendo Ntoumi, detenidas después de varios meses, lo que fue la antesala de la firma en diciembre del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y representantes opositores del reverendo Ntoumi. El ministro de Interior congolés Raymond Zéphyrin Mboulou supervisó la firma del acuerdo, que pretende poner fin a la rebelión iniciada contra el Gobierno en abril. Según el acuerdo, el reverendo Ntoumi se comprometía a facilitar el desarme de sus combatientes, la restauración de la autoridad estatal en Pool, y el Gobierno se comprometía a garantizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración social y económica de los ex combatientes, así como el reasentamiento de la población desplazada por la violencia en la zona y la libertad de movimiento. Se prevé la creación de una comisión conjunta que deberá supervisar la implementación del acuerdo.

RDC	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.²⁶ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de junio de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia: Azarias Ruberwa del RCD-Goma y Jean-Pierre Bemba del MLC. El GNT elaboró la Constitución, refundada en diciembre de 2005. Entre julio y octubre de 2006 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, y

Jean-Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno en el año 2007 no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad.

El país permaneció afectado por la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y el aplazamiento de las elecciones nacionales, así como por **la grave escalada de la violencia en la región de Kasai.**²⁷ Aunque el Gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo el 31 de diciembre, según el cual se iniciaba una fase de transición en la que el presidente Joseph Kabila permanecía en el cargo hasta la celebración de las elecciones presidenciales en diciembre de 2017, la aplicación de dicho acuerdo fue lenta, incompleta y no inclusiva, lo que se sumó a un empeoramiento del contexto socioeconómico y un aumento de la represión por las fuerzas de seguridad nacionales, que alimentaron el descontento en la capital y en los principales centros urbanos.

Diferentes factores contribuyeron a empeorar el contexto político y social. En primer lugar, la muerte del histórico opositor y gran defensor de la democracia y el multipartidismo en el país, Étienne Tshisekedi, líder del partido opositor UDPS, afectó a la situación política. Su liderazgo era reconocido en medio de una oposición fragmentada. Su muerte provocó una lucha por el liderazgo y divisiones en el seno del partido UDPS y del resto de la oposición de cara a liderar la nueva etapa que fueron aprovechadas por la mayoría presidencial. En segundo lugar, la creciente violencia e inseguridad en la región de Kasai, que generó preocupación por sus consecuencias en torno a la implementación del acuerdo y la convocatoria electoral. En tercer lugar, la oposición política y social intentó mantener durante el año la presión sobre el Gobierno y la mayoría presidencial con movilizaciones y protestas de cara a dar cumplimiento al acuerdo del 31 de diciembre y convocar elecciones antes de finales de 2018, con un seguimiento desigual y que fueron reiteradamente reprimidas con dureza por parte de los cuerpos de seguridad, en un creciente uso de la fuerza que causó decenas de víctimas mortales y centenares de heridos durante todo el año. Aunque fueron más moderadas que en años anteriores, debido a la represión sistemática por parte de los cuerpos de seguridad y la fragmentación de la oposición, el Gobierno incrementó la presión. Según destacó la ONU, el espacio democrático continuó reduciéndose, y existieron violaciones de los derechos civiles y políticos, en particular las libertades de reunión pacífica, de opinión y de expresión. Algunos periodistas, opositores políticos y activistas de la sociedad civil seguían siendo objeto de amenazas, acoso y violencia.

26. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

27. Véase el resumen de RDC (Kasai) en el capítulo 1 (conflictos armados).

Entre los hechos más destacados del año respecto al proceso de implementación del acuerdo, cabe destacar que en julio el Gobierno designó al Consejo Nacional para el Seguimiento del Acuerdo (CNSA) y la CENI declaró que era imposible organizar las elecciones en 2017, tal y como establecía el acuerdo de 31 de diciembre de 2016, ya que aunque el registro de votantes estaba prácticamente acabado (por retrasos en Kasai debido a la inseguridad), había todavía numerosas cuestiones logísticas, técnicas y de financiación del proceso pendientes de resolver que impedían avanzar el mismo proceso. En agosto se hizo un llamamiento desde la sociedad civil congoleña para promover una movilización no violenta para obligar a Kabila a dimitir si las elecciones no se celebraban en diciembre de 2017. Finalmente, el 5 de noviembre la CENI publicó el calendario electoral. Éste prevé la celebración de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y provinciales el 23 de diciembre de 2018 y el nombramiento del presidente en enero de 2019, más de un año más tarde respecto al acuerdo del 31 de diciembre de 2016. La oposición política y la sociedad civil unánimemente rechazaron el calendario, y el anuncio provocó la convocatoria de nuevas huelgas y movilizaciones con seguimiento desigual en diversas localidades para mostrar el rechazo ante el retraso electoral y el mantenimiento en el poder de Kabila. Estas movilizaciones fueron prohibidas y sistemáticamente dispersadas. Numerosos miembros de la oposición fueron detenidos. El Gobierno justificó el retraso electoral por la situación de seguridad y por dificultades logísticas y técnicas. La Conferencia Episcopal congoleña (CENCO) realizó un llamamiento a Kabila para que hiciera una declaración pública en la que asegurara que él no sería candidato a su reelección. El Consejo de Seguridad de la ONU validó el calendario electoral presentado y, junto a la UA y la CENCO, insistieron que no se produjeran nuevos retrasos. EEUU y la UE establecieron sanciones a altos cargos de los cuerpos de seguridad y diversas organizaciones y países amenazaron con interrumpir el flujo de recursos al país en caso de nuevos incumplimientos. El 19 de diciembre, un año después del fin del segundo y último mandato de Kabila, se convocó una nueva movilización con bajo seguimiento, y el año finalizaba en medio de un clima de preocupación y pesimismo por la evolución negativa de la situación y la actuación desproporcionada de los cuerpos de seguridad dispersando las manifestaciones convocadas el 31 de diciembre en las que murieron siete personas.

Magreb - Norte de África

Túnez	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna

Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Oqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS
-----------------	---

Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

Túnez continuó viéndose afectado por la actividad de grupos armados y por un clima de tensión política interna como consecuencia de problemas económicos y sociales. **Los hechos de violencia armada tuvieron un menor impacto en términos de letalidad respecto a años anteriores.** Si en 2015 y 2016 los ataques, ofensivas y enfrentamientos en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad arrojaron un balance cercano al centenar de personas fallecidas, respectivamente, los hechos ocurridos en 2017 provocaron la muerte de una decena de personas. Los incidentes tuvieron lugar durante todo el año, principalmente en forma de ataques yihadistas contra sedes policiales o patrullas, atentados explosivos, operaciones de las fuerzas de seguridad contra presuntas células armadas y enfrentamientos entre tropas y presuntos yihadistas en distintos puntos del territorio, entre ellos Kebili (sur), Sidi Bouzid (centro), Hassi Ferid y Mount Salloum (oeste), Mount Mghilla (noreste) o la región de Kasserine. En esta última zona, fronteriza con Argelia, las fuerzas de seguridad dieron muerte, en agosto, al líder de Oqba bin Nafaa, grupo armado alineado con AQMI.²⁸ A lo largo del período también se informó del desbaratamiento de una presunta ofensiva de ISIS destinada a tomar control de territorio en el sur del país, así como de la detención de personas supuestamente vinculadas a grupos armados. Fuentes locales e internacionales de seguridad alertaron sobre el retorno al país por parte de combatientes que se habían afiliado a organizaciones armadas en Libia, Siria o Iraq. Según estimaciones de la ONU, unas 5.000 personas de nacionalidad tunecina se habían sumado a actividades armadas de línea yihadista, aunque fuentes locales reducían esta cifra a unas 3.000.

28. Véase el resumen sobre Argelia en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Cabe destacar que durante 2017 se renovó periódicamente el estado de emergencia vigente en el país desde 2015 y que algunas voces críticas –incluyendo la Liga Tunecina para los Derechos Humanos– alertaron que las políticas gubernamentales no estaban garantizando el debido proceso a los sospechosos de terrorismo. En esta línea, **Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad tunecinas estaban recurriendo a tácticas del pasado, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y acoso a familiares de sospechosos.** En un informe publicado en febrero la organización expuso la aplicación arbitraria de una serie de medidas en el marco del estado de emergencia y documentó 23 casos de tortura y malos tratos.²⁹ Paralelamente, durante el año Túnez fue escenario de diversas protestas contra el alto desempleo, el deterioro de las condiciones de vida y la corrupción, que en algunos casos derivaron en enfrentamientos con la Policía y causaron al menos un muerto y decenas de heridos. Sectores críticos cuestionaron a la coalición gobernante y al presidente. El mandatario, a su vez, hizo explícitos sus cuestionamientos al sistema político delineado por la nueva Constitución –por considerar que limita los poderes del Ejecutivo– e impulsó una reforma de gabinete para situar a aliados en puestos clave. Algunas de las medidas que despertaron mayores críticas fueron la aprobación, en septiembre, de la llamada “ley de reconciliación administrativa”, que otorgó una amnistía a funcionarios del antiguo régimen involucrados en casos de corrupción y el anuncio de una nueva postergación de las elecciones municipales, que debían celebrarse en diciembre y fueron reprogramadas para marzo de 2018. Se trata de los primeros comicios locales desde la revuelta contra el régimen de Ben Alí y servirán para escoger a los responsables de 350 municipios, desde 2011 administrados por entes provisionales.

Las fuerzas de seguridad tunecinas fueron acusadas de recurrir a torturas y detenciones arbitrarias en el marco de la aplicación del estado de emergencia

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, Mara/Barrio/Calle 18, entre otras) y otras estructuras de crimen organizado
Síntesis:	
Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en	

El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generado ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

Se redujo notablemente la tasa de homicidios respecto del año anterior, pero El Salvador siguió siendo claramente el país centroamericano con mayores índices de violencia y se incrementó la preocupación por la situación de los derechos humanos y por las repercusiones que pueda tener en la estabilidad y seguridad del país la posibilidad de una deportación masiva de personas provenientes de EEUU. En efecto,

en 2017 se produjeron 3.954 homicidios, un 25% menos que los 5.280 que se produjeron en 2016. En ese año la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 81,7, mientras que en 2017 fue de 60. Ello supone una reducción significativa de los niveles de violencia por segundo año consecutivo, puesto que dicha tasa se situó en los 103 homicidios en 2015, año en que El Salvador fue considerado el país más violento del mundo. Según el Gobierno, la tasa de homicidios de 2017 fue parecida a las de los del período entre 2012 y 2014 conocido como “La Tregua”, en el que el Gobierno auspició una tregua entre y con

las principales maras del país. A pesar de esta reducción en los niveles de violencia, la tasa de homicidios en El Salvador siguió siendo la más elevada de Centroamérica y de hecho dobló la media regional. Un análisis de los patrones de violencia durante el 2017 revela que el número de homicidios se incrementó a lo largo del año. Entre enero y abril, la media de asesinatos diarios fue de 9,2, que se incrementó hasta 10,8 entre mayo y agosto y que escaló hasta más de 12 entre septiembre y diciembre. Algunos analistas consideran que ello tiene que ver con el cese unilateral de la violencia por parte de la Mara Salvatrucha en los primeros meses del año que acompañó un ofrecimiento de diálogo por parte de este grupo y con la subsiguiente reacción de algunas maras a las medidas de seguridad que el Gobierno implementó durante el año. En el mes de septiembre, coincidiendo con un incremento en los niveles de violencia respecto de los meses anteriores, los fiscales generales de los tres países del denominado Triángulo Norte llevaron a cabo una operación simultánea contra la Mara Salvatrucha que comportó la detención de cientos de personas. Pocos días más tarde, el Gobierno de EEUU señaló que una de sus prioridades era

29. Amnistía Internacional, ‘We want an end of fear’: Abuses under Tunisia’s state of emergency, 10 de febrero de 2017.

precisamente la lucha contra esta organización. Otros analistas sostienen que la tasa de homicidios en 2017 se redujo en las regiones históricamente más violentas y se incrementó en aquellas zonas tradicionalmente menos inestables, sugiriendo que la creciente presión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas sobre las pandillas juveniles habría provocado un desplazamiento de algunas pandillas a áreas en las que hasta el momento no estaban asentadas.

Por otra parte, **algunos analistas expresaron su preocupación por la repercusión que pueda tener para la seguridad del país la posibilidad, hecha pública en varios momentos del país por parte del Gobierno de EEUU, de suspender el denominado Estatus Temporal de Protección que ha estado en vigor durante más de dos décadas en EEUU y que afecta a más de 200.000 personas de origen salvadoreño residiendo en EEUU** (y a más de 270.000 descendientes de personas con el mencionado estatus). Esta decisión, que durante el 2017 ya afectó a las personas de origen haitiano y nicaragüense, podría comportar una deportación masiva de personas y, según algunas organizaciones de derechos humanos, incrementar la inseguridad en el país. De hecho, el propio Gobierno denunció a finales de año que el número de pandilleros deportados al país se había incrementado en más de un 100% respecto del año anterior. Meses antes también había advertido que cada día estaban regresando al país de media entre cuatro y cinco líderes de maras. También cabe destacar que durante el año se produjeron varias denuncias sobre violaciones de derechos humanos que afectaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, en julio el propio Fiscal especial sobre los derechos humanos hizo público un informe en el que se citaban unos 800 abusos de derechos humanos en los que se habían visto involucradas la Policía y las Fuerzas Armadas. Poco después, varios medios de comunicación reportaron la existencia de grupos de autodefensa civil en varias partes del país e incluso de escuadrones de la muerte dentro de la Policía. En el mes de septiembre, un miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció que las cifras de víctimas mortales fruto de enfrentamientos entre varias pandillas y los cuerpos de seguridad del Estado escondían ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, cabe destacar que el Gobierno reconoció durante el año que el desplazamiento forzado era un problema de alcance nacional y anunció la preparación de un protocolo para atender a las víctimas de este fenómeno.

Honduras	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, estructuras de crimen organizado (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

La situación política y social del país se caracteriza principalmente por las altas tasas de homicidios de Honduras, que en los últimos años suele considerarse entre los países más violentos del mundo, así como por la polarización social y política que se produjo tras la llegada al poder de Manuel Zelaya en 2006. Las críticas de amplios sectores de la población por su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse a un nuevo mandato o bien por su relación con a los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial a Venezuela, desembocaron en un golpe de Estado en 2009 que provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya, que le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2009. A pesar de que Zelaya pudo regresar al país en 2011, desde entonces se ha producido una cierta polarización social del país que se reflejó en la crisis política derivada de los comicios presidenciales del 2017 entre el presidente saliente y un candidato muy cercano políticamente a Zelaya.

A pesar de que durante 2017 se registró una importante reducción en la tasa de homicidios, el país vivió la crisis sociopolítica más importante de los últimos años tras la celebración de las elecciones presidenciales el 26 de noviembre. Los dos candidatos que concurrían a los comicios –el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, y el candidato opositor, Salvador Nasralla– reivindicaron el triunfo electoral, lo cual provocó el inicio de **varias semanas de protestas y movilizaciones en las que, al finalizar el año, más de 30 personas habían muerto** –31 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 36 según Nasralla–, cientos habían resultado heridas y más de 1.600 habían sido detenidas –a mediados de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había reportado la detención de 1.675 personas, pero en enero de 2018 Nasralla pidió la liberación de 800 presos políticos–. A mediados de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral había decretado a Hernández como vencedor de los comicios por un estrecho margen de un punto y medio porcentual, pero la Alianza de Oposición contra la Dictadura no reconoció dicho resultado e instó a la población a movilizarse de manera permanente y a evitar la toma de posesión del cargo de Hernández. A principios de enero de 2018, el Gobierno decretó el estado de emergencia y el toque de queda, suspendido algunos días más tarde. La oposición denunció que en el primer recuento de votos Nasralla obtuvo el 57% de los sufragios, que finalmente se redujo al 41,25% definitivo después de que el sistema de escrutinio sufriera varias interrupciones, por lo que pidió un nuevo recuento de votos ante un organismo internacional independiente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que el estrecho margen de votos, así como las irregularidades y problemas que se evidenciaron en las elecciones, impedían saber con certeza quién ganó los comicios, de modo que llamó a la celebración de unas nuevas elecciones. El Partido Nacional, que apoya a Hernández, desaprobó tales declaraciones y señaló que Almagro se había extralimitado en el cumplimiento de sus funciones. La misión electoral de la UE no se pronunció al respecto para no interferir en los asuntos

internos del país y el Gobierno de EEUU tomó nota de la decisión del TSE –aunque no felicitó a Hernández–, instó a una resolución pacífica de las diferencias políticas y se reunió con Nasralla en Washington. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron medidas como el toque de queda e instaron al Gobierno a garantizar el derecho de manifestación. Cabe destacar que, además de Nasralla, las manifestaciones opositoras estuvieron lideradas por el ex presidente Manuel Zelaya, depuesto en 2009 en un golpe de Estado.

Por otra parte, a finales del año el Gobierno declaró que **en 2017 se registraron 3.791 asesinatos, un 26,4% menos que en el año anterior, de modo que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 59,1 a 42,8**. El Gobierno declaró que la tasa de homicidios, tras alcanzar un máximo histórico de 86,4 en 2011 (año en el que Honduras fue considerado el país más violento del mundo), había experimentado un descenso continuado y acumulaba una reducción de 34 puntos en los últimos cuatro años (en 2013 la tasa de homicidios era del 77,4). Las cifras oficiales coinciden en buena medida con las publicadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, que a finales de año señaló que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes se situó en el 46,2, con una media de 11 asesinatos diarios y 338 mensuales. Además, la Policía declaró que durante el año se habían incautado 5.765 armas de fuego y se habían detenido a 2.976 miembros de estructuras criminales, entre ellos 831 de la Mara Salvatrucha. El Gobierno también declaró que la acción policial había afectado la capacidad operativa de 726 estructuras criminales. Cabe señalar que en el mes de abril, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas urgió al Gobierno a desmilitarizar la seguridad interna y a fortalecer los mecanismos de transparencia y control civil de la seguridad. Durante el año, tanto la oposición como varias organizaciones de derechos humanos siguieron denunciando numerosas violaciones de los derechos humanos, así como una campaña de hostigamiento y asesinato de líderes políticos y sociales. Finalmente, cabe señalar que en el mes de julio el Gobierno declaró que más de 22.500 personas hondureñas indocumentadas (entre ellas 2.122 menores) habían sido deportadas desde EEUU, México y Centroamérica en los primeros seis meses del año. A pesar de que estas cifras suponen una reducción de 32% respecto del mismo período en 2016, las autoridades hondureñas estiman que cada día alrededor de un centenar de personas abandonan el país con destino a EEUU, en muchos casos a través de organizaciones criminales. En este sentido, a finales de octubre se celebró en Honduras una cumbre regional sobre desplazamiento forzado para acordar mecanismos de protección y abordar las consecuencias humanitarias de desplazamiento interno y los flujos de personas refugiadas en los países del denominado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

México	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

La tasa de homicidios se incrementó un 27% respecto del año anterior y alcanzó la cifra más alta en los últimos 20 años según datos públicos. Aunque estas cifras no especifican las causas ni la autoría de los homicidios, el Gobierno declaró que la gran mayoría de los mismos están relacionados con las acciones de los cárteles de la droga y otras estructuras de crimen organizado. El incremento de los niveles respecto del año anterior es significativo por cuanto en 2016 México ya había sido, según datos del International Institute of Strategic Studies, el segundo país más letal del mundo (por detrás de Siria), con más de 23.000 homicidios relacionados con la violencia criminal. En 2017 los estados con mayores índices de violencia fueron Guerrero, Baja California, Estado de México, Veracruz y Chihuahua. Según algunos analistas, **la principal causa que explica el incremento en el número de homicidios, que alcanzó los 29.168, fue la creciente fragmentación en el número de organizaciones criminales**. Según un estudio por parte del semanario Proceso, el número de grupos de crimen organizado se ha incrementado desde los seis en 2007 hasta más de 400 actualmente, lo cual incrementa la violencia entre carteles de la droga, como se observó en 2017 con el cartel de Sinaloa o el cartel del Golfo. En este sentido, en el mes de abril **la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que entre 2007 y finales de 2016 se identificaron 855 fosas comunes clandestinas** de las que se habían exhumado 1.584 cuerpos y que prácticamente 30.000 personas habían desaparecido. Sin embargo, el informe no concreta la responsabilidad tanto de las fosas clandestinas como de las desapariciones forzadas. En

la misma línea, durante el año varias ONG señalaron que más de 300.000 personas se habían tenido que desplazar desde el año 2009 a causa de la violencia. Según fuentes periodísticas, más de 150.000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón iniciara la llamada guerra contra las drogas.

Durante el año también se registraron numerosas denuncias por parte de ONG sobre un incremento de la violencia y vulneraciones de derechos humanos contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas o migrantes. En el mes de diciembre, por ejemplo, los relatores especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtieron que los niveles de temor y violencia que sufre el colectivo periodístico en México son superiores a Siria u otros países inmersos en conflicto armado o bajo régimen autoritario. En octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos instó al Gobierno a reaccionar ante el drástico incremento de peticiones de refugio, especialmente de personas provenientes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Según esta comisión, el número de peticiones se ha incrementado en un 578% respecto del año anterior, alcanzando las 10.262. Finalmente, cabe destacar la fuerte oposición por parte de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la aprobación, en el mes de diciembre, de la llamada Ley de Seguridad Interna, que prevé un marco legal que normaliza y legitima el uso de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado, la corrupción, el terrorismo u otros crímenes. Varias de las instituciones que se opusieron a dicha ley consideran que la seguridad pública corresponde a la policía civil y no al Ejército. En este sentido, en el mes de agosto el centro de investigación Ethos Laboratorio de Políticas Públicas publicó un informe en el que señalaba que el incremento del presupuesto de seguridad en un 60% entre 2008 y 2015 no había comportado una reducción en la tasa de homicidios ni en los altos niveles de impunidad judicial, que llegaba a cifrar en un 99%. Del mismo modo, en noviembre WOLA publicó un informe en el que advertía que solamente se había dictado sentencia en 16 de los 505 casos de presuntas violaciones de derechos humanos en las que se habían visto involucradas las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2016.

América del Sur

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

La tensión política y social entre el Gobierno y la oposición se agudizó nuevamente a raíz de pulso institucional entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional y de los cuatro procesos electorales que se vivieron en el país durante el 2017. A finales de julio, **la Fiscal General del Estado declaró que 121 personas habían muerto y unas 2.000 habían resultado heridas desde el 1 de abril en el marco de las movilizaciones y las protestas que se produjeron en la mayor parte de estados del país** tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) de retirar la inmunidad parlamentaria a los miembros del Congreso y de asumir las competencias de la Asamblea Nacional –controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015– por considerar que incumplía y desacataba varias sentencias judiciales. La Asamblea Nacional declaró que no asumía la decisión judicial y que desconocería todos los fallos del máximo tribunal del país y, además, llamó a activar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para expulsar al país del organismo regional, por considerar que la sentencia suponía un “golpe de Estado”. Poco después de que la Fiscal General del Estado declarara que estas sentencias del TSJV violaban varios aspectos de la Constitución, el propio tribunal retiró las medidas más controvertidas de sus resoluciones. A pesar de ello, 19 países votaron una resolución de la OEA en la que instaban al Gobierno a restaurar la democracia y a respetar la separación de poderes, mientras que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de “autogolpe de Estado” la decisión del TSJV. Las movilizaciones que se iniciaron en el mes de abril, las más masivas de los últimos meses, también estuvieron motivadas por la inhabilitación de 15 años para el ex candidato presidencial en 2012 y 2013 y actual gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, por presuntas irregularidades cometidas en tanto que gobernador de Miranda. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) emitió un informe en el que afirmaba que 124 personas habían muerto entre el 1 de abril y finales de julio y en el que se hacía eco de

los datos de algunas ONG según los que, en ese mismo periodo, más de 5.000 personas habrían sido detenidas. El ACNUDH también denunció que varias de estas detenciones podrían ser consideradas desapariciones forzadas, que más de 600 de las personas detenidas habrían sido sometidas a la jurisdicción militar, que los distintos cuerpos policiales habían utilizado la violencia de manera intencional e innecesaria y que las acciones de varios grupos de civiles armados habrían provocado la muerte de decenas de personas.

La tensión entre el Gobierno y la oposición se agudizó nuevamente en el mes de julio por la decisión del Gobierno de convocar unas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, una institución impulsada por el Gobierno y que se otorgaría la potestad de asumir las competencias del Parlamento y de la Fiscalía General, así como de redactar una nueva Constitución. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación fue del 41,4% (más de ocho millones de personas), pero la oposición declaró que ésta había sido de unos tres millones de personas. Además, la Fiscal General del Estado declaró que 10 personas habían muerto en acciones vinculadas a las elecciones del 30 de julio. Pocas semanas antes, la oposición había convocado una consulta unilateral no reconocida por el Gobierno en la que, según la oposición, habrían participado unos 7,5 millones de personas, la inmensa mayoría de las cuales se opuso a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y votó a favor del nombramientos de nuevos jueces del TSJV, del establecimiento de una nueva autoridad electoral y de la formación de un gobierno de unidad nacional. En el mes de agosto, la nueva Asamblea Nacional Constituyente votó la asunción de poderes de la Asamblea Nacional (decisión rechazada por ésta), la destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega, y la imputación de varios líderes opositores por traición y por su participación en las protestas antigubernamentales que se produjeron desde el mes de abril. Tanto las elecciones del 30 de julio como las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente fueron condenadas por numerosos gobiernos y por organismos internacionales como la OEA, y comportaron la imposición de sanciones por parte de países como Canadá, EEUU o la UE, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que no descartaba el uso de la fuerza para propiciar la restauración de la democracia en Venezuela.

El último trimestre del año estuvo marcado por las elecciones regionales y municipales, celebradas en octubre y diciembre respectivamente, así como por los intentos de diálogo entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana, que contaron con la facilitación de varios países y que no lograron un acercamiento significativo de posturas. Las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre y originalmente previstas para diciembre de 2016 provocaron una nueva escalada de tensión entre el Gobierno y la oposición por las acusaciones de irregularidades de ésta última. En este sentido, tanto la oposición como el Grupo de Lima,

compuesto por 12 países latinoamericanos, pidieron una auditoría independiente e internacional de todo el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral declaró que el oficialismo había ganado en 18 de los 23 estados del país, mientras que la oposición lo hizo en los cinco restantes. En cuanto a las elecciones municipales celebradas el 10 de diciembre, el CNE señaló que el oficialismo había obtenido 308 de los 335 cargos municipales en disputa y que la participación había sido del 47%, pero tanto la oposición como numerosos analistas señalaron que la participación había sido mucho más baja y que se habían cometido numerosas irregularidades y anomalías como coerción, compra de votos, o violación del secreto de voto. A finales de diciembre, supuestamente como resultado del diálogo que mantuvieron el Gobierno y la oposición durante la primera mitad del mes de diciembre en República Dominicana, 44 prisioneros políticos fueron liberados, aunque la oposición señaló que el acuerdo entre las partes había sido de 80.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados yihadistas.

Continuó la situación de tensión en torno a diversos ejes, incluyendo la represión contra el islam político, así como las alertas por los riesgos de seguridad procedentes de insurgencias regionales. En clave interna, las autoridades mantuvieron su persecución

contra actores considerados cercanos al ilegalizado Partido del Renacimiento Islámico (PRI). Actor clave del conflicto armado de los años noventa y de los acuerdos de paz de 1997 y objeto de una política de persecución gubernamental desde 2015, el PRI fue designado ese año como organización terrorista y en 2016 se vio afectado por la prohibición de partidos religiosos en el país, desmantelándose los acuerdos de paz, que garantizaban su participación política, tendencia que continuó en 2017. **Durante el año se agravó la represión contra familiares de miembros encarcelados o exiliados del PRI**, a través de presentación de cargos considerados fabricados por organizaciones de derechos humanos, incluyendo acusaciones de intentos de derrocar el orden constitucional por vías violentas. En 2017, 105 activistas políticos permanecían encarcelados, según el Central Asia Labour Rights Monitoring Mission. El propio líder del PRI, Muhiddin Kabiri, cifró en más de un centenar los miembros del PRI en prisión, de los cuales una veintena tendrían sentencias de más de 20 años de cárcel, mientras cargos locales y activistas del partido cumplían sentencias de diez y veinte años. Kabiri, quien recibió asilo político en febrero en Alemania, afirmó que continuaría con la actividad política desde el exilio. Medios estatales advirtieron que la misión de la OSCE en el país podría ser cerrada si Muhiddin Kabiri participaba en una conferencia de la OSCE sobre derechos humanos en Polonia en septiembre, a la que finalmente Kabiri asistió. Amnistía Internacional denunció palizas, amenazas, insultos y acoso cometido contra el abogado de derechos humanos y representante de varios acusados en la causa penal contra el PRI Buzurgmekhr Yorov. Siguiendo la política de persecución contra expresiones del islam no oficialista, en enero de 2018 las autoridades cerraron en torno a un centenar de mezquitas en el norte del país.

Por otra parte, durante el año **las autoridades tayikas mantuvieron la alerta por los percibidos riesgos de extensión de la violencia de la vecina Afganistán a Tayikistán**, así como, por otra parte, por los riesgos que puede suponer el retorno de combatientes de ISIS procedentes de Tayikistán. El Ministerio de Interior afirmó en enero que se habían impedido 36 ataques terroristas en el país en 2016, mientras cifró en 1.100 el número de ciudadanos de Tayikistán que combatían en las filas de ISIS en Siria e Iraq, de los cuales 300 habrían fallecido y 60 retornaron a Tayikistán acogidos a una amnistía. Cuatro familiares del ex coronel tayiko Gulmurod Khalimov, que se sumó a las filas de ISIS en 2015 como “ministro de guerra”, murieron a manos de las fuerzas de seguridad en julio en el distrito de Vose (provincia de Khatlon, suroeste, fronteriza con Afganistán y Uzbekistán). Otros familiares fueron detenidos y encarcelados. Un comandante de una unidad fronteriza de Tayikistán murió y cuatro guardias fronterizos resultaron heridos en un tiroteo en la frontera con Afganistán a comienzos de diciembre. Tayikistán instó a las autoridades afganas a reforzar la frontera. Según las autoridades, durante el año se habrían producido al menos 26 incidentes armados

en la frontera, en los que habrían muerto al menos 13 personas, definidos como traficantes de droga. Durante el año Tayikistán acogió ejercicios militares de gran escala. En marzo, 50.000 tropas tayikas y 2.000 rusas llevaron a cabo maniobras en el sur del país. En mayo, el país fue escenario de nuevos ejercicios militares, por primera vez bajo el paraguas del Centro Antiterrorista de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). En ellos, Rusia utilizó por vez primera en ejercicios fuera de su territorio el sistema de misiles balísticos Iskander-M. Por otra parte, continuaron produciéndose situaciones de tensión en la frontera con Uzbekistán. La guardia fronteriza tayika denunció la incursión de varios guardias fronterizos de Uzbekistán, que habrían tiroteado a un ciudadano de Tayikistán alegando actuar en defensa propia.

Asia Meridional

India (Assam)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT

Síntesis:

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

El estado indio de Assam continuó siendo escenario de violencia, como consecuencia de la actividad de diversos grupos insurgentes y de la acción de las fuerzas de seguridad indias, pero se registró un notable descenso de la mortalidad asociada a la situación de conflicto con respecto a años anteriores. Durante 2017 se produjeron 26 víctimas mortales como consecuencia de la violencia, frente a las 86 que se registraron el año anterior, y en claro contraste con las 305 que se llegaron a producir en el año 2014, de acuerdo con las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal. No obstante, no desaparecieron los diversos focos de tensión y se registraron enfrentamientos entre

grupos insurgentes y fuerzas de seguridad, numerosas detenciones de personas acusadas de pertenecer a estos grupos armados, operaciones de las fuerzas de seguridad y prácticas como atentados y extorsiones. Además, persistieron las tensiones comunitarias, sobre todo entre la población local y la población llegada de Bangladesh en las últimas décadas, así como entre diferentes grupos étnicos. Se registraron enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y grupos armados como el ULFA-I o el NDFB-IKS, que dejaron varias víctimas mortales en diferentes momentos del año. Uno de los episodios más graves de violencia se registró en diciembre, cuando integrantes del ULFA-I tirotearon a dos hombres, padre e hijo, en el distrito de Tinsukia a quienes acusó de colaboración con las Fuerzas Armadas indias. El primero era un líder local del partido nacionalista hindú BJP y su hijo había sido dirigente de la organización estudiantil AASU y tras su muerte se convocaron diversas protestas sociales. Por otra parte, cabe destacar que las fuerzas de seguridad advirtieron de que en los últimos años se ha producido un incremento de la actividad insurgente en todos los estados del nordeste de la India en la zona fronteriza con Myanmar, país en el que algunos grupos tienen sus bases, trasladándose aquí enfrentamientos que anteriormente tenían lugar con mayor frecuencia en la frontera con Bangladesh. Respecto a la actividad de las fuerzas de seguridad, cabe destacar que por primera vez en 27 años, el gobierno del estado de Assam decidió prolongar la aplicación de la legislación antiterrorista de excepción, la Armed Forces Special Powers Act, tarea que hasta entonces había quedado en manos del Gobierno central indio. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado las múltiples violaciones a los derechos de la población civil que esta legislación ha amparado a lo largo de décadas de conflicto.

India (Manipur)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)

Síntesis:

La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgen varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcará el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y serán constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del

estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

En el estado de Manipur persistió la situación de tensión y violencia y se registró un aumento en el número de víctimas mortales como consecuencia del conflicto que transcurre en el estado. **A lo largo de 2017 se produjo la muerte de 55 personas como consecuencia de la violencia armada, frente a las 33 registradas en 2016**, según las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal. Durante todo el año se registraron enfrentamientos esporádicos entre los grupos insurgentes que operan en el estado y las fuerzas de seguridad indias, así como enfrentamientos entre los propios grupos armados. Además, las fuerzas de seguridad protagonizaron múltiples operaciones contrainsurgentes a lo largo de todo el año que derivaron en detenciones de insurgentes así como también en diversas muertes. También se registraron asesinatos de civiles. Por otra parte, cabe destacar que durante los primeros meses del año persistió la situación de bloqueo económico que se inició en noviembre de 2016 por parte de organizaciones nagas contra la decisión del estado de crear nuevos distritos. A finales del mes de marzo se pactó el levantamiento del bloqueo y se inició un proceso de negociaciones con las organizaciones nagas respecto a la configuración territorial del estado que al finalizar el año no había concluido ni había dado lugar a avances significativos en lo que respecta a un nuevo acuerdo territorial. Por otra parte, cabe destacar que el Tribunal Supremo de la India ordenó en julio una investigación de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en el estado entre 1979 y 2012, que según las organizaciones de derechos humanos serían más de 1.500. Tanto el Gobierno como las fuerzas de seguridad se opusieron a esta investigación, acusando a los grupos insurgentes de estar detrás de los asesinatos.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en

el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

La situación de tensión entre India y Pakistán continuó profundamente deteriorada durante todo el año, con múltiples incidentes de violencia que empañaron las relaciones diplomáticas entre ambos países y que dificultaron cualquier avance en un proceso de diálogo para solventar los diversos conflictos que enfrentan a ambos Estados. **A lo largo del año se repitieron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad de los dos países en diferentes emplazamientos de la Línea de Control, frontera de facto que separa a los dos países, con violaciones al acuerdo de alto el fuego de 2003 por parte de los dos países.**

Como consecuencia de estos incidentes podrían haber muerto en torno a un centenar de personas según las diferentes informaciones aparecidas en prensa, aunque muchas de las acusaciones mutuas de asesinato no pudieron ser confirmadas de manera independiente. En mayo, la Corte Internacional de Justicia paralizó la ejecución de un exoficial de la Armada india acusado de espionaje y de promover actividades terroristas en Baluchistán y condenado a pena de muerte en Pakistán. Por otra parte, el Gobierno indio denunció el asesinato y mutilación de dos soldados indios por parte de las fuerzas de seguridad de Pakistán a principios de mayo e instó al embajador pakistaní a exigir a su Gobierno que emprendiera acciones contra estos hechos. Además, la muerte en Jammu y Cachemira a finales de mayo del insurgente Sabzar Ahmad Bhat, líder del grupo armado Hizbul Mujahideen, como consecuencia de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad indias, incrementó la tensión en la zona y en junio se produjeron nuevos choques transfronterizos que causaron la muerte de dos civiles en el distrito de Poonch en Pakistán y de una persona en Jammu y Cachemira. India acusó a Pakistán de haber iniciado la violencia. En septiembre, el Gobierno indio acusó de haber tiroteado a una niña pakistaní, lo que generó protestas sociales tras su muerte. En diciembre, tres soldados murieron como consecuencia de disparos indios en Rakh Chikri Sector del distrito de Poonch. Estas muertes se producían días después de que el Gobierno indio acusase a Pakistán de ser el responsable de la muerte de cuatro soldados indios en el distrito de Rajauri de Jammu y Cachemira.

Se produjeron múltiples violaciones del alto el fuego entre India y Pakistán a lo largo del año, que provocaron decenas de víctimas mortales

Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos

Síntesis:

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, que evitó una condena exiliándose a Arabia Saudita. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución de al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los ataques al poder judicial, la impopularidad de la alianza con EEUU en un periodo de aumento del antiamericanismo, la crisis económica y medioambiental, o la creciente presencia de grupos terroristas en otras zonas del país (más allá de las áreas tribales), con el consecuente aumento de la inseguridad, son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras las elecciones legislativas, con gran parte del Parlamento en su contra. Asif Ali Zardari del PPP fue votado para sucederle en la presidencia. A pesar del retorno de la democracia al país, y de vivir hitos históricos como el primer traspaso de un Gobierno (PPP) que finaliza su legislatura de cinco años de forma pacífica al siguiente Gobierno electo (Liga Musulmana de Nawaz), Pakistán sigue siendo un país inestable.

En paralelo a los diferentes conflictos armados que asolan Pakistán,³⁰ el país atravesó también una grave crisis política, con algunos episodios de violencia asociados a sus diferentes focos de tensión. La ciudad de Karachi continuó gravemente afectada por la violencia y se registraron 337 homicidios violentos. En

lo que respecta a la situación del Gobierno pakistaní, cabe destacar que en el mes de julio **el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, se vio forzado a renunciar a su cargo después de que la Corte Suprema le inhabilitara para ostentar cargos públicos a raíz de las informaciones reveladas por los Papeles de Panamá** relativas a varias empresas de su familia vinculadas a casos de corrupción y ordenara que se iniciara una investigación contra el primer ministro y su familia. Sharif rechazó las acusaciones de corrupción. El partido de Sharif decidió la nominación del hermano del ex mandatario y ministro jefe de Punjab, Shahbaz Sharif como primer ministro y que el cargo fuera ocupado de forma interina por el antiguo ministro federal Shahid Khaqan Abbasi hasta la elección de Sharif por el Parlamento. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de pequeños

30. Véase el resumen de Pakistán en el capítulo 1 (Conflictos armados).

enfrentamientos entre seguidores de Sharif y del líder de la oposición Imran Khan en varias localidades. En noviembre se produjo una nueva crisis gubernamental, que en este caso afectó al ministro de Justicia, que también se vio forzado a dimitir tras las intensas protestas y disturbios en diferentes ciudades del país que tuvieron lugar a lo largo del mes de noviembre en los que murieron al menos seis personas y otras 200 resultaron heridas. La dimisión se produjo después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con los líderes de las protestas, encabezadas por la organización religiosa TLYR, que acusaban al ministro de blasfemia por haber impulsado una reforma electoral en la que se modificaba la formulación de la creencia en el Profeta Mahoma y que el TLYR interpretaba también como una suavización de la designación de la comunidad ahmadí como no musulmana. El acuerdo contemplaba la puesta en libertad de todas las personas detenidas en el marco de los disturbios. Por otra parte, persistieron las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo serias restricciones a la libertad de expresión, desapariciones forzadas y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, además de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, con una estimación de 1.000 asesinatos “por honor” anuales.

Asia Oriental

China (Xinjiang)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social

Síntesis:

Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán, es la región más occidental de China, alberga importantes yacimientos de hidrocarburos y ha estado habitada históricamente por la población uigur, mayoritariamente musulmana y con importantes vínculos culturales con países de Asia Central. Tras varias décadas de políticas de aculturación, explotación de los recursos naturales e intensa colonización demográfica, que ha alterado sustancialmente la estructura de la población y ha provocado tensiones comunitarias desde los años cincuenta, varios grupos armados secesionistas iniciaron acciones armadas contra el Gobierno chino, especialmente en los años noventa. Beijing considera terroristas a tales grupos, como ETIM o ETLO, y ha tratado de vincular su estrategia contrainsurgente a la llamada lucha global contra el terrorismo. En 2008, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing, se registró un incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes, mientras que en 2009 se produjeron los enfrentamientos comunitarios más intensos de las últimas décadas. En los años siguientes la violencia se hizo más intensa, frecuente y compleja, hasta alcanzar su apogeo en 2014. Posteriormente, la creciente militarización de la región y la aplicación de medidas de contrainsurgencia provocaron una drástica reducción de los episodios de violencia, aunque también se incrementaron las denuncias por violaciones de los derechos humanos.

Aunque se mantuvo la tendencia a la baja en los niveles de violencia de los años anteriores, **el Gobierno expresó su preocupación por un repunte de las acciones armadas a principios de año y por la identificación de Xinjiang por parte de ISIS y al-Qaeda como un lugar estratégico para los movimientos yihadistas, lo cual generó un notable incremento de la militarización de Xinjiang y el consiguiente incremento de denuncias por violaciones de los derechos humanos.** Durante el primer trimestre del año, un centro de investigación de la Academia China de Ciencias Sociales publicó un artículo en el que, sin dar cifras, señalaba que los niveles de violencia se habían reducido desde el año 2016, pero a la vez también reconocía que éstos podrían volver a incrementarse nuevamente por la existencia de sólidos vínculos entre grupos armados locales y grupos yihadistas foráneos. Por su parte, algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que es difícil hacer un análisis riguroso de la evolución de los niveles de violencia en la región porque el Gobierno suele restar importancia o directamente no informar sobre la mayor parte de incidentes armados que ocurren en Xinjiang. Sea como sea, tras varios meses de relativa calma y sin episodios significativos de violencia en Turquestán Oriental, la preocupación del Gobierno chino se incrementó a principios de año por la muerte de tres personas a manos de las Fuerzas Armadas en el marco de un operativo antiterrorista que se puso en marcha después de que a finales de diciembre de 2016 cinco personas fallecieron cuando intentaban atentar con explosivos contra un edificio del Partido Comunista en el condado de Moyu. Posteriormente en febrero, ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que, según el Gobierno, un grupo de personas armadas con cuchillos atacara a varios civiles en el condado de Pishan. Por otra parte, a finales de febrero, ISIS y el Partido Islámico del Turkestán, afiliado a al-Qaeda, lanzaron sendos vídeos en los que amenazaban directamente al Gobierno chino y en el que llamaban a incrementar el número de ataques en Xinjiang. Según algunos analistas, el vídeo emitido por ISIS es importante porque es el primero en lengua uigur y porque supone que China, a diferencia de lo que sucedía hasta el momento, pasa a ser un objetivo importante en la retórica de organizaciones yihadistas. En los días posteriores al lanzamiento del mencionado vídeo, el Gobierno chino expresó su preocupación por los vínculos transnacionales de los grupos armados que operan en Xinjiang y anunció su intención de incrementar la cooperación internacional para dificultar que el tránsito de combatientes que vayan a Siria o que regresen de ella. Además, el presidente chino, Xi Jinping, llamó públicamente a construir un muro de acero alrededor de Xinjiang y, ya hacia finales de mes, el poder legislativo aprobó nuevas medidas antiterroristas, que fueron criticadas por varias organizaciones por considerar que atentan contra los derechos humanos y contra la libertad religiosa de la comunidad musulmana.

Ante esta situación, en las semanas posteriores a los incidentes violentos de principios de año, el Gobierno desplegó a decenas de miles de fuerzas y cuerpos de

seguridad del estado sin precedentes, llevó a cabo desfiles militares en varias ciudades de Xinjiang y anunció el refuerzo de las medidas de control fronterizo. En esta línea, según algunos medios, en el mes de mayo el Gobierno habría ordenado a todos los estudiantes de Xinjiang estudiando en el extranjero de regresar bajo la amenaza de que sus familiares fueran detenidos. Además, en las mismas fechas el Gobierno anunció su intención de introducir el uso de drones para reforzar la vigilancia de fronteras en Xinjiang, que limita con ocho países de Asia central y meridional y tiene unos 5.600 kilómetros de trazado fronterizo. Además, como parte de la nueva legislación sobre control fronterizo que entró en vigor en diciembre de 2016, el Gobierno también anunció su intención de instalar cámaras de vigilancia y alambre de espino a lo largo de toda la frontera. Según Beijing, uno de los principales retos en la región es la posible infiltración en Xinjinag de organizaciones yihadistas foráneas o bien de grupos armados uigures que hayan recibido entrenamiento, santuario y financiación en países de la región. En este sentido, el Gobierno chino volvió a recalcar su preocupación por los vínculos transnacionales de los grupos armados que operan en Xinjiang y anunció su intención de incrementar la cooperación internacional para dificultar que el tránsito de combatientes que vayan a Siria o que regresen de ella. Finalmente, cabe destacar que en diciembre **Human Rights Watch publicó un informe en el que denunciaba que el Gobierno, a través de un sistema de chequeos médicos, está creando bases de datos con información biométrica (como el ADN, las huellas dactilares o muestras de sangre) sobre millones de ciudadanos en Xinjiang entre 12 y 65 años con finalidades de control y vigilancia.**

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, Rep. de Corea

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera *de facto* en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión

volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

La elección de Moon Jae-in en el mes de mayo conllevó una mejora sustancial en las relaciones bilaterales entre ambos países, aunque tanto Seúl como Pyongyang siguieron cruzando acusaciones acerca del programa nuclear norcoreano, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte o los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Norte y EEUU. En efecto, en el mes de mayo, Moon Jae-in –cuyos padres nacieron en Corea del Norte pero abandonaron el país durante la Guerra de Corea– ganó los comicios prometiendo un acercamiento a Corea del Norte, pero a la vez reforzando las capacidades militares del país para hacer frente al programa nuclear norcoreano. Poco después de tomar posesión del cargo, delegaciones de Corea del Norte y Corea del Sur se reunieron con motivo de una reunión de la iniciativa One Belt, One Road (también conocida como La Nueva Ruta de la Seda) auspiciada por China en la que la delegación surcoreana habría trasladado su disposición al diálogo. Más tarde, **en el mes de julio, Moon Jae-in propuso la celebración de conversaciones militares para rebajar la tensión en la frontera en la localidad fronteriza de Panjunmon, las primeras de este tipo desde diciembre de 2015.** Del mismo modo, el nuevo presidente surcoreano también propuso la celebración de conversaciones de tipo humanitario para abordar los encuentros de familias separadas por la guerra, así como la posibilidad de que ambos países desfilaran conjuntamente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero de 2018 en la localidad surcoreana de Pyeongchan. Esta propuesta se realizó pocos días después de que Pyongyang llevara a cabo un ensayo con un misil balístico intercontinental y poco antes de realizar unos ejercicios militares conjuntos que provocaron las críticas de Corea del Norte. En agosto, las Fuerzas Armadas surcoreanas volvieron a llevar a cabo maniobras militares conjuntas con EEUU. Además, ambos Gobiernos anunciaron que había sido testado con éxito el nuevo sistema de defensa anti-misiles instalado por EEUU en territorio surcoreano, y que cuenta con la firme oposición tanto de Corea del Norte como de China. Sin embargo, en el mismo mes de agosto, en plena escalada verbal de amenazas de guerra entre Corea del Norte y EEUU a raíz del lanzamiento de varios misiles por parte de Pyongyang, Moon Jae-in recordó que cualquier acción militar en la península coreana debe ser decidida únicamente por Corea del Sur y que su Gobierno trataría de evitar cualquier confrontación bélica a toda costa. En los últimos meses del año el Gobierno de Corea del Sur impuso sanciones por el ensayo nuclear que llevó a cabo Pyongyang a principios de septiembre y por el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales a finales de noviembre, pero a la vez ambos Gobiernos

acordaron la celebración de conversaciones de alto nivel en la frontera común a principios de 2018. Además, Mae Jae-in obtuvo el compromiso de EEUU de no celebrar ejercicios militares conjuntos antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno si a su vez Pyongyang se comprometía a congelar cabo nuevos ensayos balísticos o nucleares. Según el presidente surcoreano, estas medidas podrían facilitar las conversaciones entre Corea del Norte y del Sur, así como un acercamiento de posiciones entre Corea del Norte y EEUU.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ³¹	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Se incrementó notablemente la tensión entre Corea del Norte y parte de la comunidad internacional por el ensayo nuclear que llevó a cabo Pyongyang a principios de septiembre, el de mayor alcance hasta el momento, así como por el ensayo con un misil balístico intercontinental llevado a cabo por Corea del Norte a finales de noviembre. Ya a principios de año, **el Gobierno de EEUU mostró su preocupación por los avances en las capacidades nucleares y balísticas de Corea del Norte que se habían producido en 2016**, un año en el que Pyongyang llevó a cabo el mayor número de ensayos armamentísticos de su historia: 24 de misiles y dos de bombas nucleares. Durante el 2017 Pyongyang también llevó a cabo numerosos ensayos con misiles balísticos, propiciando críticas y algunas nuevas sanciones por parte de Naciones Unidas y varios países, pero los que generaron mayor preocupación fueron los que se lanzaron el 4 y el 28 de julio y, especialmente, el ensayo con un misil balístico intercontinental (Hwasong-15)

a finales de noviembre. Este ensayo, que provocó la imposición de nuevas sanciones por parte de Naciones Unidas o de los Gobierno de Corea del Sur o EEUU, generó una enorme inquietud porque, según algunos expertos, el mencionado misil habría alcanzado una altitud netamente superior a la de ensayos anteriores y denota la capacidad de Corea del Norte de impactar en cualquier parte del EEUU continental. En este sentido, algunos científicos señalaron que, si bien el recorrido del mencionado misil fue de unos 4.500 kilómetros, tendría un alcance de unos 13.000 kilómetros. Además, Corea del Norte anunció que este tipo de misiles podían llevar adosadas cabezas nucleares de grandes dimensiones y declaró que con este ensayo se finalizaba el programa balístico y se culminaba la tarea de convertir a Corea del Norte en una potencia nuclear. El Gobierno de EEUU mostró su preocupación y admitió que este nuevo tipo de misiles podían impactar en prácticamente cualquier parte del mundo y suponían una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Pocos meses antes, a principios de septiembre, **Pyongyang declaró haber detonado con éxito una bomba nuclear de hidrógeno, generando preocupación entre la comunidad internacional por tratarse del mayor ensayo nuclear hasta el momento (el sexto)** y, según varios analistas, por tratarse de la bomba atómica más fácilmente adosable a misiles balísticos. En las semanas siguientes a este ensayo, que provocó la imposición de nuevas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de varios países, se incrementó la tensión en la península, especialmente la retórica entre EEUU y Corea del Norte. Así, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU en el mes de septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que destruiría totalmente Corea del Norte si ésta amenazaba a EEUU o cualquiera de sus aliados. Además, bombarderos estadounidenses sobrevolaron partes orientales de Corea del Norte. Por su parte, el Gobierno norcoreano declaró que Trump había declarado la guerra a su país y se reservó el derecho de tomar medidas defensivas como el derribo de los mencionados bombarderos. Aunque en términos generales el Gobierno de EEUU se mostró partidario de una solución dialogada para la desnuclearización de la península coreana, en algunas ocasiones altos cargos del Gobierno o congresistas declararon públicamente que no descartaban la opción militar para poner fin al programa nuclear norcoreano. En este sentido, la tensión entre Corea del Norte y EEUU también pivotó sobre otros tres ejes. En primer lugar, por los ejercicios militares de este país en la región, en ocasiones en conjunto con Corea del Sur. En 2017 se llevaron a cabo algunos de los ejercicios militares de mayor envergadura de la historia. En segundo lugar, por la instalación en Corea del Sur de un sistema de defensa de misiles por parte de EEUU, que cuenta con la oposición de países como Corea del Norte, China o Rusia. En tercer lugar, por la inclusión por parte de EEUU de Corea del Norte

31. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

en el listado de países que auspician y promocionan el terrorismo, de la que había sido retirado años atrás como medida del fomento de la confianza para iniciar las conversaciones multilaterales a seis bandas sobre la desnuclearización de la península coreana.

Sudeste Asiático y Oceanía

Tailandia	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que murieron más de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de Thaksin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización política y social y siguieron produciéndose de forma periódica manifestaciones multitudinarias impulsadas tanto por del Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento conocido como “camisas rojas”, que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) como por la Alianza Popular para la Democracia (movimiento conocido como “camisas amarillas”. Dicha inestabilidad desembocó en numerosos actos de violencia, en la renuncia de varios Gobiernos y en el derrocamiento del Gobierno de Yingluck Shinawatra –hermana de Thaksin Shinawatra– a través de un golpe de estado en mayo de 2014. Desde entonces, el país está gobernado por una junta militar denominada Consejo Nacional para la Paz y el Orden, que ha sido acusada en numerosas ocasiones de prohibir la acción de los partidos, restringir libertades fundamentales y derechos y de querer institucionalizar y perpetuar una situación de excepcionalidad constitucional y democrática.

No se produjeron movilizaciones sociales ni episodios de violencia significativos, pero sí se registraron una serie de atentados en las semanas anteriores al tercer aniversario del golpe de Estado de mayo de 2014, así como numerosas críticas por la vulneración de derechos humanos, por la prohibición de la actividad de los partidos políticos y por la creciente represión contra la oposición política y social, especialmente contra el movimiento denominado de Camisas Rojas y contra la primera ministra depuesta en dicho golpe de Estado, Yingluck Shinawatra. Respecto de este último punto, cabe señalar que **Shinawatra, hermana de un primer ministro también depuesto en golpe de Estado en 2006, abandonó el país en el mes de agosto, pocas semanas antes de que el Tribunal Supremo la condenara *in absentia* a cinco años de cárcel por cargos de corrupción** vinculados a un programa de subsidios

del sector del arroz. Coincidiendo con ambos hechos y anticipando posibles protestas, la Junta Militar incrementó las medidas policiales en todo el país. Poco antes, había sido secuestrado en Vientiane (Laos) un destacado líder del movimiento de los Camisas Rojas acusado de organizar un movimiento de resistencia armada contra el llamado Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO). Cabe destacar que en las semanas inmediatamente anteriores al tercer aniversario del golpe de Estado de mayo de 2014 que instaló en el poder al actual CNPO se produjeron varios atentados –a principios de abril en una venida importante, a mediados de mayo en un teatro, a finales de mayo en un hospital militar– en los que unas 30 personas resultaron heridas en Bangkok, además de la identificación de un artefacto explosivo en el metro de la capital a finales de mayo. Estos incidentes, atribuidos por el Gobierno a un mismo grupo que tendría el objetivo de desacreditar a la Junta Militar, provocaron un incremento significativo en el número de detenciones. En este sentido, en varios momentos del año organizaciones de derechos humanos e incluso del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas criticaron que prosiguiera la detención de numerosos activistas políticos y sociales, la continua vulneración de derechos fundamentales, la ley de delitos de lesa majestad o la propia constitución interina auspiciada por la Junta Militar.

Por otra parte, **tanto la oposición como organizaciones de la sociedad civil también criticaron que siguiera vigente la prohibición de cualquier actividad a los partidos políticos, los retrasos en la aprobación de la nueva Constitución o en el anuncio de la fecha para la celebración de las elecciones generales que deberían comportar una normalización democrática del país.** Respecto de este último aspecto, aunque en 2016 se había especulado con la posibilidad de que las elecciones tuvieran lugar durante el 2017, el propio primer ministro, Prayuth Chan-ocha, declaró que en junio de 2018 anunciaría la fecha elegida para los comicios. Si bien circuló la información de que podrían celebrarse en diciembre de 2018, el CNPO dejó claro que éstas no se celebrarían hasta que se hubieran ultimado las cuatro leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de los partidos políticos y las elecciones. En cuanto al proceso de tramitación de la nueva Constitución, en el mes de abril el rey finalmente sancionó el borrador, solamente después de que se hubieran incorporado varias enmiendas que refuerzan las competencias reales. En el ámbito institucional, también cabe destacar el inicio en enero por parte del Gobierno de un proceso de reconciliación nacional, el restablecimiento de varias instituciones por parte de la Asamblea Legislativa –como la Comisión Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Defensor del Pueblo– o la enmienda en noviembre de la ley de seguridad, que incrementa los poderes en el ámbito local del Mando de Operaciones de Seguridad Interna. Finalmente, cabe señalar en el mes de diciembre la UE decidió restablecer los contactos políticos a todos los niveles con el Gobierno para, según Bruselas, facilitar la

transición a la democracia y el diálogo sobre cuestiones como los derechos humanos, restableciendo así las relaciones políticas anteriores al golpe de Estado de mayo de 2014.

2.3.4. Europa

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

El conflicto en torno a Nagorno-Karabaj se mantuvo en niveles elevados, con episodios graves de confrontación militar que, sin embargo, no alcanzaron los umbrales de letalidad de la grave crisis de abril de 2016, en que murieron al menos dos centenares de personas, incluyendo civiles. En 2017 se produjeron violaciones del alto fuego e incidentes en torno a la línea de contacto durante todo el año, incluyendo con armamento pesado y armas antitanque, especialmente graves en febrero y mayo, con un balance anual de al menos una cincuentena de víctimas mortales y otros tantos heridos. En febrero, en medio de enfrentamientos que causaron al menos una quincena de víctimas mortales y que fueron los más graves desde abril de 2016, fuerzas armenias y azerbaiyanas se acusaron de intentos de incursión y el grupo de Minsk de la OSCE –órgano mediador en el proceso de paz– alertó de que las partes habían desplazado equipamiento militar pesado a posiciones más próximas a la línea de contacto. A mediados de mayo se produjeron de nuevo incidentes graves. El Ejército azerbaiyano disparó un misil contra

un equipo militar armenio en la línea de contacto el 15 de mayo, y entre el 16 y 17 de mayo fuerzas armenias respondieron con fuego de mortero de varios calibres. Así lo describió el comunicado del Grupo de Minsk, que señaló también que había informaciones contradictorias sobre los objetivos y víctimas. El Gobierno azerbaiyano lo criticó, denunciando que se posicionaba a favor de Armenia. En los enfrentamientos, las partes hicieron uso de misiles dirigidos y se llevaron ataques contra instalaciones militares cerca de zonas densamente pobladas.³² Según el ejecutivo azerbaiyano, el sistema armenio de defensa aérea destrozado había sido desplegado a una nueva posición en un intento por ganar control sobre el espacio aéreo. A su vez, con motivo del aniversario de los hechos de abril de 2016, los líderes de Armenia y de Azerbaiyán expresaron su disposición a involucrarse en una guerra. Asimismo, el líder armenio afirmó en medios de comunicación que usaría el sistema de misiles Iskander contra Azerbaiyán si era necesario, declaraciones respondidas por Azerbaiyán en marzo advirtiendo de que las represalias azerbaiyanas supondrían balances de víctimas y niveles de destrucción de gran escala en Armenia. En meses siguientes continuaron produciéndose episodios periódicos de violaciones del alto el fuego, aunque de menor intensidad. Durante el año, las partes llevaron a cabo maniobras militares, incluyendo maniobras conjuntas de Armenia y Rusia, así como de Azerbaiyán y Turquía –de gran escala, con 15.000 militares y más de 150 tanques, y en las que Azerbaiyán mostró nuevo equipamiento de artillería, incluyendo de origen checo, lo que llevó a las autoridades checas a anunciar una investigación al respecto, dado el embargo de armas de la UE y la OSCE.³³ Por otra parte, en el plano interno de Nagorno-Karabaj, la región celebró en febrero un referéndum no reconocido internacionalmente en que se aprobaron cambios constitucionales que la convierten en república presidencialista y que permitirán a su actual líder continuar en el cargo transitoriamente y concurrir de nuevo a elecciones en 2020.

Rusia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición social y política, grupos armados –incluyendo ISIS–.

Síntesis:

Rusia, el país con mayor superficie del mundo y de vastos recursos naturales –principalmente gas y petróleo–, sucedió a la URSS en 1991 tras la caída del bloque soviético. Desde entonces ha atravesado etapas complejas, incluyendo un proceso de reformas económicas y políticas, privatización y liberalización en los primeros años, de la mano del presidente Boris Yeltsin en los años noventa, que reforzó a núcleos de poder empresarial; y de tránsito hacia un estado

32. International Crisis Group, *Nagorno-Karabakh's Gathering War Clouds*, Europe Report, no. 244, 1 de junio de 2017.

33. Véase el apartado sobre embargos de armas en el capítulo 1 (Conflictos armados).

autoritario, principalmente en la etapa de las presidencias de Vladimir Putin (2000-2008 y 2012 en adelante). Ante la inconstitucionalidad de un tercer mandato, su aliado Dmitri Medvédev le sucedió en la presidencia entre 2008 y 2012, generando expectativas de mayor apertura democrática, que no llegaron a consolidarse. Medvedev fue nombrado primer ministro en 2012 tras la vuelta de Putin a la presidencia. En clave interna, desde su llegada al poder, Putin reforzó el control político vertical de las instituciones y los medios de comunicación y desmanteló el poder adquirido por oligarcas en la etapa Yeltsin, algunos simpatizantes de la oposición liberal. En paralelo, las restricciones en materia de derechos y libertades han reducido el margen de contestación política. Aun así, en 2012 se asistió a numerosas movilizaciones contra supuestas irregularidades en las elecciones y en demanda de apertura política. Otros ejes de tensión interna incluyen la violencia de corte yihadista que afecta al norte del Cáucaso –derivada de la transformación y regionalización de la violencia que afectó a Chechenia en las guerras de los noventa– y que ha resultado también en atentados y violencia en otros puntos de Rusia. Asimismo, se han incrementado las alertas por la participación de ciudadanos con nacionalidad de Rusia en las filas de ISIS en Siria e Iraq.

Rusia fue escenario de tensión en torno a diversos ejes, incluyendo diversos atentados terroristas durante el año, así como movilizaciones opositoras. Durante el año se produjeron diversos ataques, algunos reivindicados por ISIS. Un atentado contra el metro de San Petersburgo el 3 de abril causó 15 víctimas mortales y más de 40 heridos, mientras una segunda bomba fue localizada y desactivada en otra estación del metro. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por un hombre originario de Osh (Kirguistán) con vínculos con organizaciones islamistas. Otras diez personas fueron detenidas en relación al ataque. El grupo “Batallón del Imam Shamil”, vinculado a Al-Qaeda, reivindicó el atentado. Ese mismo mes, ISIS reivindicó un ataque en Astrakhan (región homónima, sur de Rusia), que causó la muerte de dos policías, así como otra acción en la misma ciudad que hirió a tres soldados de la guardia nacional. Por otra parte, ISIS se atribuyó un ataque con arma blanca en agosto en una zona céntrica de la ciudad de Surgut (región de Siberia), en el que resultaron heridos siete viandantes. No obstante, las autoridades descartaron que hubiera sido un acto de terrorismo. Asimismo, un atentado con bomba en un establecimiento de una cadena de supermercados de San Petersburgo a finales de diciembre causó heridas a diez personas. Fue calificado de atentado terrorista por las autoridades, e ISIS reivindicó el ataque. Unas semanas después el Kremlin informó de que había frustrado ese mes varios atentados en la ciudad, incluyendo planes de ataque contra la catedral de Kazán (principal catedral de la ciudad) con apoyo de información facilitada por la agencia de inteligencia estadounidense. Varias personas fueron detenidas ese mes. Durante el año Rusia fue identificado como el principal país de origen de combatientes extranjeros de ISIS, con 3.417 combatientes de origen ruso, por encima de Arabia Saudita (3.244), según un informe de la consultoría de inteligencia y seguridad Soufan Group.³⁴

Por otra parte, se incrementó la tensión política y social en Rusia, un año antes de las elecciones presidenciales de marzo de 2018. Miles de personas –60.000 según la radio Eco de Moscú, 150.000 según la Fundación Anticorrupción, convocante– se manifestaron en marzo en diversas localidades de Rusia –82, según Eco de Moscú–, en protesta contra la corrupción por parte del Gobierno y en respuesta al llamamiento del líder opositor Alexei Navalny, cuya Fundación Anticorrupción desveló en un documental prácticas de corrupción del primer ministro, Dmitri Medvédev. Más de un millar de personas fueron detenidas, incluyendo el propio Navalny. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron uso excesivo de la fuerza. Fueron calificadas **como las protestas antigubernamentales más numerosas desde las movilizaciones de 2011-2012, previas a las elecciones de 2012.** En junio se produjeron nuevas protestas, que movilizaron a decenas de miles de personas, según informaciones de prensa, y que conllevaron la detención de un millar de personas. Navalny fue condenado a un mes de prisión. Se sucedieron protestas en meses posteriores, como octubre y noviembre, con numerosas detenciones. El Comité Electoral Central anunció en diciembre que Navalny no podrá concurrir a los comicios, por cargos de corrupción que pesan sobre él, y que el líder opositor denunció como cargos fabricados con motivación política. **El líder opositor llamó al boicot de las elecciones presidenciales de 2018.**

Rusia (Chechenia)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición

Síntesis:

Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última (autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabre en 1999, en la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por rebeldes chechenos y atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a la islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. Asimismo, la población civil hace frente a graves violaciones de derechos humanos, en gran parte cometidas por las fuerzas de seguridad locales.

34. Moore, James, *Russia overtakes Saudi Arabia and Tunisia as largest exporter of ISIS fighters*, Newsweek, 24 de octubre de 2017.

Se incrementó la tensión en la república chechena, con un aumento de víctimas mortales por tercer año consecutivo en el marco del conflicto entre fuerzas de seguridad y actores armados yihadistas, mientras se agravó también la situación de vulneraciones de los derechos humanos, con el mayor incremento de secuestros desde los inicios de la segunda guerra chechena de los años noventa, según alertaron defensores de derechos humanos. Durante el año murieron unas sesenta personas por el conflicto, según el balance de Caucasian Knot, lo que situó a Chechenia como la república del norte del Cáucaso con mayor número de víctimas mortales, por encima de Daguestán –que dejó de considerarse conflicto armado en 2017–. Además, una veintena de personas resultaron heridas, según la misma fuente. A su vez, se denunció el secuestro de al menos 51 personas, de acuerdo a las estadísticas de la **organización rusa Memorial, que denunció que la situación de secuestros, detenciones ilegales y retenciones ilegales bajo custodia por parte de agentes de seguridad volvía a ser sistémica.** El Centro para el Análisis de Conflictos y la Prevención también señaló que la república sufría una situación de secuestros en masa.

Defensores de derechos humanos denunciaron un grave incremento de los secuestros y desapariciones a manos de agentes de seguridad en la república de Chechenia

Entre los hechos de violencia durante el año, se produjeron enfrentamientos a principios de enero en el marco de una operación especial en la localidad de Tsotsi-Yurt (distrito de Kurchaloi), que seguía a los ataques de diciembre de 2016 en las afueras de la capital, y que resultó en la detención de al menos 20 personas, así como la muerte de cuatro supuestos insurgentes y dos miembros de las fuerzas de seguridad. Centros escolares y establecimientos fueron cerrados por la operación. Se produjeron detenciones masivas en esas fechas en otras localidades de ese y otros distritos, con en torno a un centenar de detenidos, según Novaya Gazeta. A su vez, choques tras un ataque contra un puesto de control de tropas de la Guardia Nacional de Rusia en el distrito de Naursky en marzo causaron la muerte de seis militares y seis combatientes y diversos heridos, tras lo que se desencadenaron nuevos arrestos masivos. ISIS reivindicó el ataque. Novaya Gazeta publicó en julio una lista de 27 varones ejecutados sin juicio a finales de enero, de entre decenas de detenidos en operaciones de seguridad tras la violencia de diciembre de 2016. La organización Memorial también publicó en julio una lista de 13 hombres desaparecidos desde diciembre de 2016, tras ser detenidos por las autoridades. También el alto comisionado de Rusia para los derechos humanos visitó Chechenia en septiembre, por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de familiares de víctimas. Por otra parte, a partir de marzo trascendió información sobre secuestros de hombres homosexuales llevadas a cabo por actores armados no estatales y fuerzas de seguridad, seguidas de detenciones arbitrarias, violencia, tortura y otros malos tratos. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos se

hizo eco de las denuncias, instó al fin de los abusos y a la investigación y persecución de lo que calificó como actos de persecución y violencia de una escala sin precedentes en la región y graves violaciones de las obligaciones de Rusia bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Novaya Gazeta y Human Rights Watch publicaron información y denuncias sobre los abusos, buena parte de los cuales habría tenido lugar en un centro de detención no oficial cerca de Argun.

Sudeste de Europa

Turquía	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Turquía, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen

Síntesis:

La actual República de Turquía fue fundada por Mustafa Kemal “Atatürk” en 1923, tras la derrota del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial –y la consiguiente partición de sus territorios (Tratado de Lausanne de 1923)–, y la guerra de independencia (1919-1923). Se fundó bajo principios como el laicismo, el nacionalismo y el estatismo, promoviéndose un estado nación secular con un papel predominante del Ejército, como actor garante. A lo largo de su historia, Turquía –país puente entre Occidente y Oriente, de mayoría musulmana y segundo Ejército de la OTAN– se ha visto afectada por periodos de inestabilidad en torno a diversos ejes y actores. Por una parte, la falta de soluciones a la cuestión kurda ha resultado en rebeliones kurdas de diversa naturaleza y persecución estatal de sectores prokurdos, sobresaliendo la guerra entre Turquía y el PKK iniciada en 1984. Por otra parte, el país ha sufrido diversos golpes de estado militares (1960, 1971, 1980, 1997). Asimismo, la etapa de poder bajo el islamista AKP (en el poder desde 2002) y el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan (primer ministro entre 2003 y 2014 y presidente desde entonces) ha ido acompañada de medidas iniciales de democratización y de denuncias, en años posteriores, de autoritarismo, incrementándose los niveles de tensión interna social y política. Asimismo, la confrontación creciente entre el régimen del AKP –en el poder desde 2003– y su antigua aliada organización del clérigo musulmán Fetullah Gülen se puso de manifiesto en un intento de golpe militar, en julio de 2016, que resultó fallido y que fue atribuido a sectores de las FFAA vinculadas a Gülen. La intentona desencadenó la declaración de estado de emergencia y purgas masivas. La situación de derechos humanos, ámbito de grave preocupación en los años 80 y 90, se deterioró de nuevo en el contexto de reinicio de la guerra con el PKK en 2015 y de las medidas de emergencia tras el intento de golpe. Por otra parte, el grave deterioro regional vinculado a las guerras en Siria e Iraq también generó nuevos ejes de conflictividad para Turquía: incremento de atentados atribuidos a ISIS contra objetivos civiles en suelo turco y un complejo escenario de relaciones exteriores.

La tensión política y social en Turquía se mantuvo elevada, en un contexto de estado de emergencia, purgas masivas y polarización, si bien se redujo la intensidad de la violencia tras un 2016 con un intento de golpe de Estado (con 265 fallecidos y en torno a 2.200 heridos) y más de un centenar de fallecidos en atentados reivindicados por ISIS. Entre los hechos que marcaron el curso político en 2017, Turquía celebró un referéndum de reforma de la Constitución en abril, aprobado con un 51,4% de los votos y un 84% de participación, precedido por una campaña en que las autoridades equipararon al campo del “no” (liderado por los opositores CHP y HDP) con el terrorismo. La oposición denunció irregularidades en la votación y, según la misión de observación de la OSCE, la consulta transcurrió en condiciones desiguales para las partes, la ciudadanía no recibió información imparcial y hubo limitaciones a las libertades fundamentales, que tuvieron un efecto negativo. El “no” a la reforma ganó en las tres principales ciudades del país (Estambul, Ankara e Izmir), que suman una cuarta parte de la población, así como –entre otras– en la mayoría de la región kurda, aunque con pérdida de votos respecto a los recibidos por el prokurdo HDP (defensor del “no”) en pasadas elecciones. La reforma aprobada transformará el país república presidencialista. Así, la presidencia detendrá la jefatura de Estado y de Gobierno, eliminándose el cargo de primer ministro, se amplían los supuestos en los que el presidente podrá gobernar por decreto, y se incrementa el número de miembros de altos tribunales nombrados directamente por el presidente, entre otros cambios.

Por otra parte, la tensión política y social continuó elevada, de la mano del estado de emergencia, en vigor todo el año (con renovaciones en enero, abril y octubre) y purgas masivas contra población acusada de vínculos con el fallido golpe de Estado de 2016 y con el actor al que se le atribuye su autoría –la organización religiosa bajo liderazgo del clérigo exiliado en EEUU, Fetullah Gülen, denominada por el Gobierno como FETÖ–. Entre las medidas, en torno a 4.4000 funcionarios fueron despedidos, incluyendo cientos de académicos y personal de los ministerios de Interior, Economía, Exteriores, Educación, así como de la gendarmería y de los servicios de seguridad, ascendiendo así a 125.000 las personas que han sido destituidas o suspendidas de sus puestos desde el intento del golpe. Se produjeron detenciones masivas de personas acusadas de vínculos con la organización de Gülen. Durante el año también se produjeron detenciones de activistas de derechos humanos, como el caso del presidente de Amnistía Internacional Turquía, detenido y encarcelado en junio, y de diez defensores de derechos humanos detenidos en julio, incluyendo la directora de Amnistía Internacional Turquía, con cargos de pertenencia a grupo terrorista –de éstos últimos, dos de ellos fueron puestos en libertad ese mes, y los restantes ocho en libertad condicionada en octubre–, o de reconocidas figuras civiles, como el filántropo Osman Kavala, en octubre. Políticos y activistas kurdos también fueron detenidos, incluyendo cargos electos, y se despojó de sus escaños a varios

parlamentarios kurdos, incluyendo en febrero a la co-líder del HDP Figen Yuksekdog, condenada con cargos de propaganda terrorista. Defensoras de los derechos humanos de las mujeres expresaron grave preocupación por el impacto del estado de emergencia sobre las organizaciones de mujeres, que impactó de manera específica y en mayor escala sobre organizaciones de mujeres kurdas –afectadas por cierres e ilegalizaciones– o que trabajan en áreas kurdas. En su informe publicado en marzo sobre la situación de derechos humanos en el sur de Turquía, ACNUDH señalaba que la protección y supervisión de derechos humanos se había visto severamente afectada por el uso de la legislación antiterrorista para retirar a oficiales electos de origen kurdo, el hostigamiento a periodistas independientes, el cierre de medios de comunicación independientes y en lengua kurda, así como el cierre de asociaciones ciudadanas y la suspensión masiva de jueces y fiscales. Ante las medidas de persecución, la oposición política puso en marcha iniciativas como la “marcha de la justicia” desde Ankara a Estambul, promovida por el CHP y que concluyó en junio, o las manifestaciones de “observación de la justicia” promovidas por el HDP en Estambul y otros puntos del país, entre agosto y noviembre. En medio de la tensión política y social, el HDP boicoteó la primera sesión del curso parlamentario, en octubre. Por otra parte, Turquía experimentó una reducción de la violencia asociada a ISIS, en contraste con un 2016 de numerosos atentados reivindicados por el grupo armado. Según las autoridades turcas, durante el año se detuvo a unas 2.000 personas acusadas de vínculos con ISIS.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Arabia Saudita	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)

Síntesis:

Gobernada desde el siglo XVIII por la familia al-Saud y establecida como Estado en 1932, Arabia Saudita se caracteriza por su conservadurismo religioso y su riqueza, sustentada en las reservas de petróleo. Potencia regional, a nivel interno la monarquía sunní concentra el poder político y lidera las instituciones de gobierno, dejando escaso margen para la disidencia. Los partidos políticos no están permitidos, la libertad de expresión constreñida y muchos derechos básicos limitados. La minoría chií, concentrada en la zona este del país, ha denunciado marginación y exclusión de las estructuras del Estado. Las autoridades han sido acusadas de emprender acciones represivas en nombre de la seguridad del país y en el marco de campañas antiterroristas, que tienen entre sus objetivos militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). En el contexto de la denominada

Primavera Árabe de 2011, las protestas pro-reformas y democracia suscitaron una respuesta represiva del Gobierno –en especial en las zonas de mayoría chií del país–, y las autoridades han denunciado la existencia de intentos de desestabilización desde el exterior, señalando a Irán. El país es escenario de acciones armadas esporádicas de AQPA y, más recientemente, de células vinculadas presuntamente a ISIS.

Al igual que el año anterior, la tensión en Arabia Saudita estuvo determinada por dinámicas internas y por las consecuencias de su política exterior, caracterizada por una creciente implicación en asuntos regionales y una pugna de poder con Irán. **Durante 2017 se produjeron diversos hechos de violencia en el país que provocaron la muerte de al menos 17 personas, una cifra similar a la del año anterior**, principalmente vinculados con la actividad de grupos armados y a la contestación en la zona de mayoría chií del país. El episodio más cruento tuvo lugar en agosto, en la ciudad de Awamiya en la región de Qatif (Provincia Oriental), donde los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y presuntos combatientes chiíes habrían acabado en la muerte de nueve civiles. En esta misma localidad, en medio de una redada, hombres armados atacaron una patrulla militar provocando la muerte de un soldado y heridas a dos policías, en mayo. Otros incidentes destacados tuvieron como protagonistas a ISIS: dos atacantes hicieron detonar su carga explosiva en Jeddah tras ser rodeados por la policía, en enero; y otros dos presuntos miembros del grupo murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante redadas en Riad, en octubre. Ese mismo mes, un hombre que asesinó a dos guardias en las afueras del palacio real acabó muerto por la policía. A lo largo del año las autoridades saudíes anunciaron detenciones de personas acusadas de pertenecer a células de ISIS o de dar apoyo a la organización. Durante el último semestre, en tanto, se intensificaron los arrestos de clérigos, intelectuales, figuras políticas y empresarios, incluyendo una treintena de altos cargos.

Arabia Saudita también se vio implicada en una escalada de tensión con diversos actores regionales. A mediados de año y a instancias de Riad, **Arabia Saudita y otros países árabes incluyendo Bahrein, EAU y Egipto cortaron lazos comerciales y diplomáticos con Qatar, acusándole de alinearse con Irán**, de promover actividades terroristas a través del apoyo a diversos grupos –incluyendo los Hermanos Musulmanes– y de intentar desestabilizar la región. Riad promovió la imposición de 13 condiciones a Qatar para revertir estas medidas y sortear el bloqueo, que seguía vigente al finalizar el año. Qatar, que recibió el apoyo de Turquía e Irán, acusó a Riad de agresión. En paralelo, Arabia Saudita continuó directamente implicada en el conflicto armado en Yemen.³⁵ Los al-houthistas dispararon misiles contra Yanbu, en julio, y contra Riad, en noviembre, que fueron interceptados por las fuerzas saudíes. Riad acusó a Irán de proveer estos arsenales a los al-houthistas y consideró que los disparos de estos proyectiles constituían una agresión militar

directa. Además señaló al grupo chií libanés Hezbollah como responsable de entrenar al grupo armado yemení en el uso de estas armas. Cabe destacar que uno de los disparos de misiles coincidió con la decisión del primer ministro libanés Saad Hariri de anunciar su renuncia desde Riad, citando como motivos amenazas de muerte y una excesiva influencia de Hezbollah e Irán en los asuntos libaneses.³⁶ Hezbollah y el presidente de Líbano acusaron a Arabia Saudita de secuestrar a Hariri, quien tras una mediación de Francia regresó a su país y retiró su dimisión.

Bahrein	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las revueltas populares que se propagaron por países del Magreb y Oriente Medio durante 2011 repercutieron también en Bahrein. Gobernado desde el siglo XVIII por la monarquía de los al-Khalifah y protectorado británico entre 1861 y 1971, en 2002 el país se constituyó formalmente en una monarquía constitucional. La familia en el poder es sunní, a diferencia de la mayoría de la población del país que es de confesión chií y que denuncia políticas sistemáticas de discriminación. Las tensiones internas, que se habían incrementado en los últimos años, se convirtieron en una contestación abierta a partir de febrero de 2011. Las demandas de reformas políticas y sociales fueron respondidas por el Gobierno con incentivos económicos y ofertas de diálogo político, pero también con represión y persecución a los detractores del Gobierno. La amenaza a la estabilidad del régimen motivó una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que envió tropas al país. La situación en Bahrein ha alimentado la confrontación entre Irán y los países del Golfo –en especial con Arabia Saudita–, y preocupa a EEUU, que tiene a su V Flota estacionada en el archipiélago.

La situación en Bahrein continuó caracterizándose por manifestaciones contra el régimen, persecución a opositores y diversos hechos de violencia que se intensificaron respecto al año anterior y causaron una decena de víctimas mortales en 2017. El incidente más grave se produjo en mayo, cuando **las protestas contra la condena judicial a un destacado clérigo chií, el ayatollah Isa Qassim, derivaron en choques con las fuerzas de seguridad que acabaron con cinco personas fallecidas y más de 280 detenidas en Diraz** (noroeste). Otros hechos de violencia incluyeron un ataque con bomba también en Diraz que causó la muerte de un policía, en junio; y una ofensiva contra un bus policial en Manama en el que murió otro policía, en octubre. Otras dos explosiones en la capital, en febrero y en octubre, causaron heridas a cinco efectivos policiales, respectivamente. Durante febrero se produjeron otras cuatro deflagraciones en Manama que no causaron

35. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 1 (Conflictos armados).

36. Véase el resumen sobre Líbano en este capítulo.

víctimas ni fueron reivindicadas. Como en años anteriores, las protestas del 14 de febrero –en un nuevo aniversario de la revuelta de 2011 en el país– derivaron en choques con la policía. A estos hechos se suma la ejecución, en enero, de tres chiíes acusados del asesinato de tres policías en 2014, en las primeras sentencias a muerte hechas efectivas en veinte años. Las ejecuciones fueron condenadas por activistas de la oposición chií y por Irán, que continuó siendo acusado por las autoridades bahreínes de intentos de desestabilización y promoción de la violencia en el país. Durante el año se informó de arrestos de presuntos miembros de células terroristas y de nuevas condenas contra dirigentes políticos de oposición y activistas de derechos humanos por incitación al odio y difusión de noticias falsas, entre otros delitos. Paralelamente se denegó la apelación del partido opositor al-Wafaq a la decisión, en 2016, de disolver la organización bajo acusaciones de terrorismo y el Gobierno inició un proceso para desarticular a otra organización disidente, Waad, con cargos similares. Las autoridades también aprobaron una reforma constitucional para permitir que civiles sean juzgados en cortes militares. Tras la crisis diplomática entre Qatar y varios países de la región, encabezados por Arabia Saudita, Bahrein criminalizó las expresiones de simpatía hacia Qatar.

En este contexto, **Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación en Bahrein denunciando el uso de tácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual**; y alertando sobre la existencia de una campaña sistemática para desmantelar a la oposición política y eliminar la libertad de expresión.³⁷ Según el informe, las acciones de las autoridades bahreínes para sofocar las protestas habrían causado la muerte de al menos seis personas, entre ellas un menor, entre junio de 2016 y junio de 2017. Amnistía Internacional documentó arrestos, torturas, amenazas y prohibiciones de viajes a 169 disidentes y sus familias en este período y denunció la falta de reacción internacional. EEUU, que en 2016 condicionó la venta de aviones a Bahrein a progresos en materia de derechos humanos, dio un giro en su política con la llegada de Donald Trump a la presidencia y en 2017 eliminó las condiciones para esta operación.

Irán vivió las peores protestas desde 2009, que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en la muerte de una veintena de personas

Irán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persisten.

La tensión se intensificó al finalizar el año en Irán, tras una serie de protestas en distintas ciudades del país que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en numerosas detenciones, en la mayor convulsión interna en el país desde 2009. Según informaciones de prensa, **desde el 28 de diciembre hasta la primera semana de enero de 2018 un total de 21 personas había muerto en los incidentes –en su mayoría manifestantes, pero también agentes de seguridad– y más de un millar de personas habían sido arrestadas.** Inicialmente las movilizaciones denunciaron cuestiones económicas, como el alza en los precios o el nivel de desempleo, y temas de corrupción, pero rápidamente adquirieron un cariz más político. Los mensajes de las protestas pusieron en entredicho la política exterior iraní y, en particular, la costosa participación de Irán en conflictos regionales como Siria e Iraq –exigiendo abandonar estos escenarios para concentrarse en la situación interna–; y criticaron al presidente Hassan Rouhani y al líder supremo, Ali Khamenei. En un hecho sin precedentes, durante las manifestaciones se lanzaron proclamas llamando a la renuncia e incluso a la muerte de Khamenei y también se escucharon algunos mensajes en apoyo a la antigua monarquía del sha. La naturaleza de las movilizaciones y su rápida expansión a diferentes localidades del país –Mashad, Kermanshah, Isfahan, Rasht, Qom, Sari, Hamedan, Qazvin, Teherán, Arak, Zanjan entre otras– alimentaron diversas interpretaciones e interrogantes sobre el origen y desarrollo de las protestas. Las manifestaciones se iniciaron en la segunda ciudad del país, Mashad, feudo de Ebrahim Raisi, clérigo ultraconservador que fue derrotado por Rouhani en las elecciones presidenciales celebradas en mayo (Rouhani obtuvo 57% de los votos frente a 38,5% de Raisi). Así, sectores reformistas iraníes consideraron que el movimiento había sido promovido sectores de la oposición a Rouhani. Algunos observadores, en tanto, destacaron que si el movimiento había sido auspiciado por algún sector,

37. Amnesty International, 'No one can protect you': Bahrain's year of crushing dissent, 7 de septiembre de 2017.

rápidamente evolucionó de manera propia. Otras voces subrayaron que a diferencia de las protestas de 2009 –protagonizadas por sectores de clase media y élites del país– las recientes manifestaciones estaban dominadas por sectores de la clase trabajadora iraní y se producían en un contexto en que el Gobierno de Rohuani enfrentaba dificultades para impulsar mejoras económicas a pesar del levantamiento de sanciones tras el pacto por el programa nuclear. Mientras, otros analistas pusieron el foco en las rivalidades internas entre las diferentes facciones iraníes, que se estarían intensificando a medida que Khamenei envejece y la carrera por su sucesión se convierte en un tema más relevante.

Ante la oleada de protestas, Rohuani reconoció que las personas tenían el derecho a criticar, pero advirtió que las autoridades no tolerarían el uso de la violencia o la destrucción de propiedades. Sectores conservadores, en tanto, admitieron la existencia de agravios económicos y políticos, pero acusaron a potencias extranjeras de explotar la situación e incitar a la violencia, en especial después de que el presidente de EEUU expresara su apoyo a las manifestaciones. Cabe destacar que en 2017 **la situación en Irán también estuvo marcada por el primer atentado de ISIS en el país, ocurrido en el mes de junio. Cinco atacantes perpetraron dos ofensivas simultáneas contra el Parlamento y el mausoleo del ex líder supremo, el Ayatollah Khomeini, causando la muerte de 17 civiles** en la capital iraní. Teherán señaló entonces a EEUU, Arabia Saudita, ISIS y sectores kurdos iraníes como posibles perpetradores, pero ISIS reivindicó el ataque. Días después las autoridades iraníes anunciaron la muerte del cabecilla de la ofensiva y lanzaron un ataque con misiles desde la ciudad de Kermanshah (oeste) contra presuntas posiciones de ISIS en Deir al-Zour, en Siria.

Irán – EEUU, Israel ³⁸	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación

de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015.

Después de dos años de reducción de la tensión internacional en torno al programa nuclear iraní, durante 2017 se registró un giro en sentido contrario, fruto de **acusaciones cruzadas, incidentes y del anuncio del nuevo Gobierno de EEUU sobre una eventual revisión del acuerdo alcanzado en julio de 2015** (Joint Comprehensive Plan of Action). A lo largo del año los informes de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) certificaron que la república islámica estaba cumpliendo con los compromisos alcanzados en el pacto. No obstante, algunas actividades, principalmente vinculadas al programa de misiles balísticos de Irán, motivaron denuncias de terceros países, con opiniones divergentes sobre la capacidad de estos aparatos para transportar armas nucleares. Teherán aseguró que sus acciones no contravenían lo dispuesto en el acuerdo sobre el programa nuclear y las defendió como parte del desarrollo de sus capacidades defensivas convencionales. Francia, Alemania, Reino Unido y, sobre todo EEUU e Israel –que acusó a Irán de cooperar con Corea del Norte en este ámbito–, alertaron sobre algunos ensayos balísticos iraníes, como el que tuvo lugar en Khorramshar, en enero, con misiles de medio alcance; o el lanzamiento de un vehículo espacial, en julio, por considerar que podrían transgredir disposiciones del acuerdo (relativas a la capacidad y potencial de recorrido de los aparatos). Otros países como Rusia, en tanto, subrayaron que la resolución 2231 –que ratificó el acuerdo sobre el programa nuclear iraní en 2015– no incluye una prohibición al desarrollo del programa espacial o balístico iraní. En este contexto, EEUU aprobó nuevas sanciones contra personas y entidades vinculadas a las pruebas balísticas iraníes, medida que Teherán denunció como una violación al acuerdo nuclear de 2015. La república islámica, a su vez, aprobó sanciones contra compañías estadounidenses a las que acusó de violar los derechos humanos y cooperar con Israel. A lo largo del año también se denunciaron otras actividades iraníes, como los viajes del mayor general Qassem Soleimani a Iraq y Siria a pesar de la prohibición dispuesta en la resolución 2231 y, en particular, la posible transferencia de misiles balísticos de Teherán a los al-houthistas, grupo armado yemení que habría utilizado estas armas en su confrontación con Arabia Saudita. En diciembre, en su informe sobre la implementación del acuerdo nuclear, la ONU informó que estaba investigando esta última denuncia y los restos de misiles recuperados tras ataques en

38. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

territorio saudí, en Yanbu y Riad, ocurridos en julio y noviembre, respectivamente.³⁹ Irán, en tanto, rechazó haber entregado asistencia militar a los al-houthistas.

Paralelamente, durante 2017 tuvieron lugar diversos incidentes, entre ellos tiros de advertencia de barcos de EEUU a naves iraníes en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz; simulacros y ejercicios militares en el Golfo Pérsico en los cuales Irán habría probado nuevos misiles de crucero; acusaciones de que naves de EEUU habían ingresado en aguas territoriales iraníes; denuncias de Irán contra Arabia Saudita por la muerte de un pescador iraní a manos de la Guardia Costera saudí y el arresto de tres Guardianes de la Revolución, presuntamente en aguas saudíes; así como amenazas cruzadas tras la decisión de EEUU de declarar a los Guardianes de la Revolución iraníes como una amenaza terrorista. Cabe destacar que esta tensión internacional también se vio influida por la posición de la nueva administración estadounidense respecto al acuerdo nuclear y una postura más hostil hacia Irán. El Gobierno de Donald Trump, que desacreditó el pacto en numerosas ocasiones durante la campaña electoral y tras llegar al poder (en enero), decidió en octubre no certificarlo y planteó la posibilidad de aprobar nuevas sanciones. Según el secretario general de la ONU, estas acciones crearon una “considerable incertidumbre” respecto al futuro del acuerdo. **Washington se mostró partidario de introducir cambios en el acuerdo, pero otros actores internacionales involucrados en la negociación –como la UE– descartaron renegociar todo o partes del pacto.** Algunos sectores en EEUU, entre ellos 90 científicos y expertos en temas atómicos, destacaron la importancia del pacto nuclear y pidieron al Congreso estadounidense que lo preserve. Durante el año, el nuevo Gobierno estadounidense también se manifestó explícitamente a favor de un cambio de régimen en Irán. En junio, el secretario de Estado, Rex Tillerson, acusó a Irán de buscar la hegemonía en Oriente Medio y aseguró ante el Congreso de EEUU que se estaba apoyando a elementos dentro de Irán que pudieran liderar una transición. Trump también apoyó las movilizaciones contra las autoridades iraníes de finales de año.

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social
Síntesis:	En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento

de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Durante 2017 se mantuvo el clima interno de represión a la disidencia, en paralelo a las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. La persecución de voces críticas y organizaciones de la sociedad civil alcanzó a principios de año al Centro Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia y Tortura, organización de referencia que fue cerrada tras ser acusada de infringir la ley de ONG. La declaración del estado de emergencia tras un doble atentado perpetrado por ISIS en abril amplió las facultades de los cuerpos de seguridad para arrestar, vigilar y detener. En este contexto **se denunció que el Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi estaba aprovechando la situación de inseguridad para intensificar la represión a la oposición y a los medios de comunicación críticos.** Así, se informó de la detención de activistas, periodistas y del bloqueo de sitios web –un total de 429 desde mayo a septiembre, parte importante de ellas de noticias, según la Asociación para la Libertad de Expresión y Prensa egipcia–, incluyendo al-Jazeera, Huffington Post en árabe y Mada Masr. En este sentido, cabe destacar que en el índice 2017 sobre Libertad de Prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras Egipto ocupaba el lugar 161 de 180 países. Las autoridades egipcias también bloquearon la web de Human Rights Watch en septiembre después de que la organización publicara un informe en el que denunció que la tortura constituye una práctica habitual de las fuerzas de seguridad egipcias. El documento se hace eco de las múltiples denuncias recogidas por ONG locales, alerta sobre arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas y documenta una veintena de casos de torturas, incluyendo prácticas

39. UNSC, *Fourth report of the Secretary General on the implementation of Security Council resolution 2231 (2015)*, 8 de diciembre de 2017.

de violencia sexual.⁴⁰ Las protestas contra medidas adoptadas por las autoridades –como la aprobación por el Parlamento de la transferencia de dos islas a Arabia Saudita o la eliminación de subsidios a los combustibles y la electricidad– también derivaron en arrestos de manifestantes durante el año. Cabe destacar que durante el último trimestre también se intensificó la persecución y violencia contra el colectivo LGTBI, con el arresto de más de ochenta personas. Desde que al-Sisi tomó el poder en 2013 más de 230 personas han sido procesadas por “libertinaje” según un informe de la Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) publicado en noviembre, que también documenta casos de tortura.

Cabe destacar que, como en años previos, a lo largo de 2017 también se conocieron nuevas sentencias contra dirigentes de los Hermanos Musulmanes, así como la condena a muerte de una cuarentena de personas –y otras numerosas sentencias a prisión perpetua– por participación en hechos de violencia tras el derrocamiento de Mohamed Mursi en 2013. El ex presidente egipcio Hosni Mubarak, en tanto, fue liberado después de seis años de detención en un hospital militar, tras ser exonerado de los cargos vinculados al asesinato de manifestantes durante la revuelta contra su régimen a principios de 2011. Finalmente, cabe mencionar que **hacia finales de año el clima político comenzó a estar marcado por las elecciones presidenciales de mayo de 2018**. Sectores favorables a al-Sisi hicieron llamamientos a postergar los comicios debido a la situación de seguridad, a extender el mandato del actual mandatario por otros dos años y a eliminar las restricciones que establecen como límite una reelección presidencial. El ex primer ministro Ahmed Shafiq anunció su intención de presentar su candidatura en noviembre desde EAU, pero las autoridades de ese país lo arrestaron y deportaron a Egipto. Semanas más tarde Shafiq declinó postularse a los comicios. Otro potencial candidato, el general Ahmed Konsowa –que según informaciones de prensa intentó sin éxito renunciar a su carrera militar para ser elegible–, fue arrestado y condenado a seis años de prisión por expresar opiniones políticas.

Iraq (Kurdistán)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Territorio, Recursos, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán, PKK
Síntesis:	Concentrada en la zona norte de Iraq, la población kurda representa entre un 15 y un 20% del total de habitantes del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las promesas sobre un Estado kurdo

independiente en la región, la población kurda ha vivido un difícil encaje con el Estado iraquí y ha padecido severos casos de represión. En 1992, tras el fin de la Guerra del Golfo, el establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte de Iraq sentó las bases para la creación del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG). Esta experiencia de autogobierno kurdo se vio reforzada después del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003 y ganó reconocimiento en el esquema federal consagrado en la Constitución iraquí de 2005. Desde entonces, las divergentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de cada una de las partes han alimentado las tensiones entre Erbil y Bagdad. La disputa se ha focalizado principalmente en el estatus de los llamados “territorios en disputa” y el control de los recursos energéticos. En el período más reciente, la guerra siria y la evolución del conflicto armado en Iraq han repercutido en las dinámicas de esta disputa, reavivando los debates sobre las perspectivas de un eventual Estado kurdo independiente.

A diferencia del año anterior, en que prevalecieron las dinámicas de cooperación en el marco de la campaña conjunta contra ISIS, durante 2017 **la tensión entre Erbil y Bagdad se intensificó principalmente con motivo de la celebración de un referéndum de independencia impulsado por el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)**. Bajo el liderazgo del presidente Massoud Barzani, el KRG anunció en junio que llevaría a cabo una consulta sobre la independencia de la región (formada por las gobernaciones de Erbil, Suleimaniya y Dohuk) y de territorios en disputa con el Gobierno federal, incluyendo Kirkuk; y fijó el 25 de septiembre como fecha para el referéndum. La medida fue respaldada en septiembre por el legislativo regional, que se reunió por primera vez en dos años, aunque partidos como Gorran o Komal expresaron su oposición a la iniciativa. La convocatoria de referéndum encontró el rechazo del Gobierno de Haidar al-Abadi y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema y por el Parlamento de Iraq, que autorizó al primer ministro iraquí a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la unidad del país. La consulta también motivó el rechazo de Turquía –hasta entonces país aliado del KRG– y de Irán, dos países con minorías kurdas y, por tanto, no interesados en alentar un Kurdistán iraquí independiente. La iniciativa del KRG tampoco contó con el apoyo de EEUU ni de Europa, que se mostraron a favor de la unidad territorial de Iraq. Washington expresó su preocupación por que el referéndum incrementara las tensiones con Bagdad e interfiriera en la campaña contra ISIS. La ONU tampoco dio su apoyo al plebiscito. Pese a este clima adverso a nivel regional e internacional, con la excepción de Israel, el referéndum se celebró en la fecha prevista, contó con un 72% de participación y arrojó un 93% de votos favorables a la independencia. Según algunos análisis, el Gobierno de Barzani mantuvo la convocatoria a pesar de la falta de respaldo externo por diversas razones, entre ellas la necesidad de recuperar legitimidad en medio de las críticas a su gestión y a su permanencia en el cargo tras el cierre del Parlamento en 2015, y por el contexto de pugnas internas en su partido, el KDP, en particular entre su hijo Masrour Barzani, favorable al

40. Human Rights Watch, “We Do Unreasonable Things Here”: Torture and National Security in al-Sisi’s Egypt, 5 de septiembre de 2017.

referéndum, y su sobrino y primer ministro, Nechervan Barzani, partidario de mantener buenas relaciones con Bagdad y Ankara (ambos candidatos a suceder a Massoud Barzani).⁴¹

La celebración del referéndum propició duras respuestas y amenazas del Gobierno iraquí, Ankara y Teherán; y motivó algunas medidas de represalia, como el cierre del espacio aéreo del Kurdistán iraquí para vuelos internacionales y de la frontera terrestre con Irán, así como maniobras militares de tropas iraníes, iraquíes y turcas en las zonas fronterizas. **La acción más significativa fue la decisión del Gobierno federal de recuperar el control de Kirkuk y otras áreas en disputa, en octubre.** Kirkuk se encontraba bajo dominio kurdo desde 2014, cuando el avance de ISIS propició el colapso de las fuerzas iraquíes en la zona. El avance de las tropas iraquíes y de las milicias shíes (PMU) que participaron en la ofensiva se vio facilitado por un acuerdo entre el Gobierno de Abadi y el partido kurdo PUK, rival del KDP, en el que Irán también habría tenido un papel relevante. Tras el repliegue de los peshmergas en Kirkuk, las fuerzas de Bagdad penetraron en la ciudad sin encontrar resistencia y en los días siguientes recuperaron el control de otras localidades como Bashiqa, Khanaqin y Sinjar, también sin enfrentamientos. En este contexto se anunció la suspensión de las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 1 de noviembre en el Kurdistán iraquí y Barzani anunció su dimisión como presidente. En las semanas siguientes Bagdad insistió en que no mantendría negociaciones con Erbil hasta que el KRG anulara los resultados del referéndum e intensificó las presiones en materia de exportaciones petroleras y de la cuota del presupuesto federal que corresponde al Kurdistán iraquí. El KRG, en tanto, anunció recortes de salarios al finalizar el año que motivaron protestas en Suleimaniya y acabaron con tres personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. En paralelo a esta dinámica de tensión, cabe destacar que, al igual que el año pasado, en 2017 se produjeron tensiones intra-kurdas entre el KDP y el PKK en Sinjar que causaron ocho víctimas mortales en marzo. Los ataques de Turquía a posiciones del PKK al noroeste de Sinjar también provocaron la muerte a 14 miembros del grupo y también a cinco peshmergas del KRG, en lo que Ankara reconoció como un error. Finalmente, cabe mencionar que durante 2017 murió el histórico líder del PUK y ex presidente de Iraq, Jalal Talabani.

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión internacional que protagonizan Israel, Siria y Líbano evolucionó de manera similar al año anterior. Durante 2017 el clima continuó estando marcado por una retórica beligerante entre las partes. A través de varios de sus dirigentes –incluyendo su máximo líder, Hassan Nasrallah–, **el grupo shií libanés Hezbollah amenazó con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona, advirtió que no habría “líneas rojas” en una próxima confrontación con Israel** y subrayó que las hostilidades tendrían lugar en los territorios ocupados palestinos. El presidente libanés, Michel Aoun, aseguró que eventuales acciones israelíes encontrarían una respuesta por parte de Líbano y defendió la posesión de arsenales por parte de Hezbollah como complementarios a los de las Fuerzas Armadas libanesas para hacer frente a Israel, una posición que no comparten todos los integrantes del Gobierno libanés. Según trascendió, Aoun rechazó los llamamientos de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano (UNIFIL) para adoptar una actitud más firme frente a las actividades de Hezbollah en el sur del país, argumentando que no podía exigir la deposición de armas al grupo shií en un contexto de amenazas de seguridad. Diversos miembros del Gobierno y altos cargos militares de Israel, en tanto, advirtieron en distintos momentos del año que en una futura contienda con Hezbollah las instituciones libanesas, así como diversas infraestructuras –aeropuertos, centrales de energía– serían considerados blancos legítimos. Durante el período ambos bandos se acusaron mutuamente de transgredir las disposiciones relativas a la resolución 1701 –aprobada tras la última guerra entre Israel y Hezbollah–, aunque UNIFIL aseguró que la situación en el área bajo su supervisión continuó tensa, pero estable. Israel insistió en denunciar la presencia de armas e infraestructuras de Hezbollah en el área bajo control de UNIFIL, aunque la misión no pudo constatarlas de manera independiente. Como en años previos, UNIFIL documentó recurrentes violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel, con frecuencia diaria, principalmente con aeronave son tripuladas. Según datos de UNIFIL, estas transgresiones aumentaron en

41. International Crisis Group, *Oil and Borders: How to Fix Iraq's Kurdish Crisis*, Middle East Briefing no.55, 17 de octubre de 2017.

número y duración. Así, por ejemplo, entre el 1 de julio y el 31 de octubre se registraron 758 violaciones del espacio aéreo, un 80% más que en el mismo período del año anterior. En este período Israel realizó maniobras simulando un eventual conflicto armado con Hezbollah. La demarcación de la frontera marítima entre Israel y Líbano fue otro de los focos de tensión entre las partes.

Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

La situación interna continuó estando determinada por las consecuencias del conflicto armado en Siria, por episodios de violencia en el seno de la comunidad palestina en Líbano y por las tensiones internas fruto del complejo escenario político del país. Al igual que en años anteriores, **el impacto de la guerra en Siria fue especialmente evidente en las zonas fronterizas y, en particular, en el área de Aarsal**. Las fuerzas de seguridad libanesas participaron en acciones contra grupos armados que operan en esta área –ISIS, Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl-Sham, entre otros–, mientras que Hezbollah también se implicó en acciones armadas contra estos grupos a uno y otro lado de la frontera en alianza con las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. Mientras, otro conjunto de libaneses continuó combatiendo en las filas de organizaciones armadas opuestas al Gobierno de Damasco. El balance de letalidad de los hechos de violencia durante 2017 es difícil de establecer dadas las informaciones imprecisas sobre algunos incidentes –que habrían causado “decenas” de víctimas–, pero en términos generales sería superior al de 2016. Sólo en agosto, los enfrentamientos entre combatientes de Hezbollah y Jabhat Fatah al-Sham en las afueras de Aarsal

habrían causado la muerte de 28 y 150 milicianos, respectivamente. En este contexto, se informó de diversos acuerdos de cese el fuego que derivaron en masivos movimientos de población. Así, por ejemplo, un pacto en julio entre Hezbollah y Jabhat Fatah al-Sham condujo al intercambio de prisioneros y a la marcha a la provincia siria de Idlib de un grupo de combatientes de Jabhat Fatah al-Sham y sus familias, entre 7.000 y 9.000 personas en total. Un acuerdo similar en agosto con una facción de unos 300 combatientes de Saraya Ahl al-Sham también motivó el repliegue de los milicianos y sus familias hacia Siria, mientras que otro alcanzado con ISIS se habría visto obstaculizado por bombardeos de la coalición liderada por EEUU en Siria. En este contexto, la ONU y grupos de derechos humanos denunciaron repatriaciones no consensuadas de población refugiada.

Cabe destacar que el impacto del conflicto sirio también se evidenció en la situación de la población refugiada. Durante el año las operaciones de fuerzas de seguridad libanesas en campamentos de refugiados motivaron la detención de más de 350 personas, cuatro de las cuales murieron en custodia. En junio, durante una operación de rastreo cinco atacantes suicidas provocaron heridas a siete soldados libaneses y la muerte de una niña en dos campamentos en la zona de Aarsal. Paralelamente, **se incrementó la vulnerabilidad económica del millón de personas refugiadas de origen sirio, con un 58% viviendo en condiciones de extrema pobreza –5% más que el año anterior–** y 74% bajo el umbral de pobreza, además de la mitad de las y los menores en edad escolar primaria fuera del sistema educativo. Según encuestas, también se incrementó el sentimiento anti-refugiados en el país –en 2014 un 40% opinaba que no había tensión entre ambas comunidades, frente a un 2% en 2017–, con protestas por la competencia laboral que supone la población siria. En este sentido, el presidente libanés aseguró que la población refugiada siria constituía un “desafío existencial” para el país y llamó a la comunidad internacional a crear las condiciones para su retorno a zonas estables y de baja tensión en Siria. La situación en la mayoría de los campamentos de refugiados palestinos, en tanto, permaneció relativamente estable, a excepción de Aïn el-Helweh, donde la violencia se intensificó. Este campo fue escenario durante todo el año de choques entre grupos de línea yihadista y fuerzas de seguridad palestinas que causaron al menos 20 víctimas mortales, además de decenas de personas heridas y el desplazamiento forzado de más de 400 familias.

Finalmente, en términos de política interna, cabe mencionar que después de varios retrasos el Parlamento libanés acordó una nueva ley electoral que debe permitir la celebración de elecciones legislativas –previstas inicialmente para junio de 2017– en mayo de 2018, las primeras en una década. A lo largo del año, siguieron haciéndose evidentes las diferencias en el seno del Gobierno respecto al papel de Hezbollah. Así, el presidente Michel Aoun

defendió en varias ocasiones la posesión de arsenales por parte del partido-milicia shíí, como complementarios a los de las fuerzas armadas libanesas y necesarios ante una eventual confrontación con Israel. Mientras, el primer ministro, Saad Hariri, insistió en considerar esta posesión de armas como ilegítima. **Hariri protagonizó un confuso incidente en noviembre, tras**

presentar por sorpresa su renuncia desde Arabia Saudita bajo el argumento de excesiva influencia de Hezbollah e Irán en Líbano y amenazas de muerte. El partido-milicia y el presidente Aoun acusaron a Riad de detener a Hariri, quien (tras una mediación de Francia) finalmente regresó al país y se retractó de su dimisión.